

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar por el Título de Abogado**

Informe sobre Sentencia N° ICC-01/12-01/15-171

Juan Ulises Hernández Pastor

Código: 19937808

Revisora: Michelle Elisa Reyes Milk

**Lima, 2021**

## RESUMEN

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) que declara al ciudadano maliense Ahmad Al Faqi Al Mahdi culpable de haber cometido el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, marca un hito por ser la primera vez que dicho tribunal emite una condena por la destrucción intencional de bienes culturales. Sin embargo, la correcta imputación del crimen referido depende de que la conducta atribuida a Al Mahdi constituya un “ataque” de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma. El presente trabajo analiza la idoneidad del sentido atribuido en la sentencia al término “ataque” a la luz de la definición del mismo en los tratados de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional relevantes, de la jurisprudencia de la propia CPI y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y de la doctrina de los publicistas especializados. Dicho análisis permite concluir que la sentencia contraviene la definición del término “ataque” contenida en el derecho internacional humanitario, el sentido atribuido a dicho término en el artículo 8 del Estatuto de Roma y los principios relativos a la interpretación de los crímenes consagrados en el artículo 22(2) del mismo.

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	I
1. Justificación de la elección de la sentencia	1
2. Relación de los hechos sobre los que versa la controversia de la que trata la sentencia	2
3. Identificación de los principales problemas jurídicos de la sentencia	8
4. Análisis y posición fundamentada sobre los problemas jurídicos de la sentencia	9
4.1 ¿La destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos por parte de Al Mahdi está vinculada al CANI que tenía lugar en Malí al momento de los hechos?	11
4.1.1 Calificación del CANI ocurrido en Malí al momento de la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú por parte de Al Mahdi	11
4.1.1.1 Criterio de organización	14
4.1.1.2 Criterio de intensidad	16
4.1.2 Condición de Al Mahdi con respecto al CANI ocurrido en Malí al momento de la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú	19
4.1.3 Relación entre la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos por parte de Al Mahdi y el CANI que tenía lugar en Malí al momento de los hechos	22
4.2 ¿La conducta de Al Mahdi califica como “ataque” en los términos del artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma?	25
4.2.1 Definición de “ataque” en el derecho internacional humanitario	27
4.2.2 Interpretación del sentido del término “ataque” en el Estatuto de Roma	30
CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFÍA	50

## INTRODUCCIÓN

El presente informe plantea un análisis jurídico de la sentencia emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del ciudadano maliense Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en la ciudad de Tombuctú durante el año 2012. Dicho análisis se enfoca en la atribución de responsabilidad penal por el crimen de guerra consistente en dirigir intencionalmente ataques contra dichos bienes, tipificado en el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma, que realizó la CPI.

Al respecto, se analizarán dos temas principales: en primer lugar, la vinculación de la conducta de Al Mahdi con un conflicto armado no internacional (CANI), presupuesto para la aplicación del tipo penal referido. Para estos efectos, se procederá a identificar si concurren los indicadores de intensidad de hostilidades y organización de las partes correspondientes a la calificación de un CANI, recurriendo a los hechos verificados por la Oficina de la Fiscalía de la CPI, así como a información provista por organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, *think tanks* y medios de comunicación. Asimismo, se recurrirá a la jurisprudencia de los tribunales internacionales para identificar las condiciones necesarias para la identificación del vínculo entre la conducta y el CANI, a fin de verificar su concurrencia en los hechos del caso.

En segundo lugar, se analizará el sentido atribuido por la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI al término “ataque” a la luz de la definición del mismo en los tratados de derecho internacional humanitario (DIH) y derecho penal internacional relevantes, de la jurisprudencia de la propia CPI y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y de la doctrina de los publicistas especializados. En este sentido, se contrastará el criterio de interpretación teleológico empleado por la CPI -favorable a una interpretación de “ataque” distinta a la definición contenida en las normas relevantes con la finalidad de cautelar el estatus especial de los bienes culturales- con una interpretación tecnicista que busque el sentido del término en la *ratio legis* de la norma, sus antecedentes jurídicos y su sistemática, sin perder de vista que al hacerlo se están cautelando también los principios de legalidad e *indubio pro reo* consustanciales a la atribución de responsabilidad penal.

El método de interpretación de la *ratio legis* permitirá esclarecer el sentido del término “ataque” por lo que connota para el DIH (es decir, un acto de violencia *contra el adversario*). Asimismo, mientras el método de interpretación sistemática por comparación con otras normas permitirá esclarecer dicho sentido al comparar el artículo 8(2)(e)(iv) con las normas de DIH que definen ataque, el método de interpretación sistemática por ubicación de la norma contribuirá a su esclarecimiento al propiciar una lectura del artículo 8 del Estatuto de Roma relativo a los crímenes de guerra en su conjunto, en la medida que “ataque” se utiliza en otros nueve tipos penales del artículo en cuestión.

## INFORME SOBRE LA SENTENCIA N° ICC-01/12-01/15-171

### **1. Justificación de la elección de la sentencia**

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Al Mahdi marca un hito por haber sido la primera vez que dicho tribunal emitió una condena por la destrucción intencional de bienes culturales. A diferencia de sus sentencias previas, el caso no contempló afectaciones físicas a personas, habiéndose centrado en la protección de los edificios dedicados a la religión y monumentos históricos per se.

Asimismo, la sentencia supuso la primera vez que un acusado ante la CPI se declaró culpable. Si bien ambas circunstancias confieren a la sentencia un interés suficiente para ser objeto de análisis, su confluencia condicionó el razonamiento de la Sala VIII de Primera Instancia de un modo aún más atractivo desde una perspectiva jurídica: al pretender cautelar la protección especial de la que gozan los bienes culturales, la sentencia interpretó el sentido del elemento “dirigir intencionalmente un ataque” contenido en el crimen imputado más allá de lo previsto en las normas de derecho internacional humanitario (DIH) y derecho penal internacional concernidas. Al haber admitido Al Mahdi su culpabilidad, dicha interpretación no fue contradicha por la defensa en el marco del proceso.

Por consiguiente, la elección de la sentencia aspira a esclarecer el sentido del término “ataque” a efectos de la atribución de responsabilidad penal por la destrucción de bienes culturales por parte de la CPI, haciendo notar que la importancia de su protección no constituye un argumento jurídico para interpretar dicho término más allá de su definición en las normas internacionales relevantes. Asimismo, el análisis procurará identificar qué normas protegen a los bienes culturales de su destrucción una vez que han caído bajo el control del adversario sin desnaturalizar el sentido del término “ataque” ni contravenir los principios de interpretación de los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma.

Para una comunidad internacional que ha asistido, en lo que va del siglo, a la destrucción de los Budas de Bamiyán en Afganistán, del Crac de los Caballeros, el Templo de Bel y el Teatro Romano de Palmira en Siria, del patrimonio cultural de estados como Libia, Myanmar o Yemen, o del patrimonio cultural armenio en el territorio de Nagorno-Karabaj, una interpretación del alcance de la responsabilidad penal internacional por la destrucción de bienes culturales consistente con el DIH y el derecho penal internacional es una necesidad urgente.

## **2. Relación de los hechos sobre los que versa la controversia de la que trata la sentencia**

El 23 de diciembre de 1988, la ciudad de Tombuctú, incluidas sus tres grandes mezquitas y 16 cementerios y mausoleos, fue listada como Patrimonio Mundial por el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Situation in Mali 2013: párrafo 110).

El 17 de julio de 1998, la República de Malí (en adelante “Malí”) firmó el Estatuto de Roma de la CPI y el 16 de agosto de 2000 depositó su instrumento de ratificación. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1ro de julio de 2002.

El 16 de octubre de 2011 se creó en Malí el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), organización político-militar que aglutinaba a rebeldes de la etnia tuareg que reivindicaban la independencia de la región norte de Malí conocida como “Azawad”.

En diciembre de 2011, se creó en la ciudad de Kidal, al norte de Malí, la organización salafista-yihadista de la etnia tuareg Ansar Dine (“Defensores de la fe”) con la intención de imponer la ley sharia en el país (Roetman, Migeon y Dudouet 2019: 12).

El 17 de enero de 2012, el MNLA atacó la base militar de Menaka en la ciudad de Gao, al norte de Malí. Dicho evento dio inicio a una rebelión contra el gobierno de Malí por parte del MNLA a la que se sumaron los grupos salafistas-yihadistas Ansar Dine, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) -de origen argelino- y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO por sus siglas en francés). En dicho contexto, la Oficina de la Fiscalía de la CPI empezó a analizar la situación en Malí (Situation in Mali 2013: párrafo 70).

Entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2012, los rebeldes tomaron las principales ciudades y bases militares de las ciudades septentrionales de Gao, Kidal y Tombuctú, obligando a las Fuerzas Armadas de Malí a replegarse hacia el sur. A partir de entonces, el MNLA y los grupos salafistas-yihadistas



empezaron a disputarse el control del norte, mientras las Fuerzas Armadas de Malí intentaban retomarlos. Finalmente, el 11 de julio de 2012, el MNLA fue expulsado de su último reducto en Ansongo (Gao) por fuerzas de Ansar Dine y el MUJAO.

Desde abril de 2012 hasta enero de 2013 -cuando dejaron Tombuctú ante el avance de las Fuerzas Armadas de Malí apoyadas por fuerzas francesas- Ansar Dine y AQMI impusieron sus edictos religiosos y políticos en la ciudad a través de un gobierno local que incluía una brigada de la moral denominada “Hesbah” (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 31).

Ahmad Al Faqi Al Mahdi (en adelante “Al Mahdi”), nacido alrededor de 1975 en la ciudad de Agoune, al oeste de Tombuctú, era un hombre reconocido por su conocimiento del islam. Después de una breve estadía en Argelia, Al Mahdi volvió a Malí en abril de 2012 para apoyar las acciones de Ansar Dine y AQMI en Tombuctú, tomando contacto directo con los líderes de ambos grupos. Al Mahdi se hizo miembro de Ansar Dine y fue nombrado jefe de la Hesbah, cuya estructura estableció y supervisó desde abril hasta septiembre de 2012, con la finalidad de reprimir todo aquello que fuese percibido por los grupos referidos como un “vicio manifiesto”.

Enterados de las prácticas religiosas asociadas a los mausoleos de santos islámicos en Tombuctú -visitados frecuentemente por los pobladores locales como lugares de oración- los líderes de Ansar Dine y AQMI pidieron a Al Mahdi monitorear los cementerios donde estos se encontraban. Al Mahdi llevó a cabo dicho monitoreo por un mes aproximadamente, tomando notas del comportamiento de los visitantes, reuniéndose con autoridades religiosas locales

y explicando en la radio lo que podía y no podía hacerse en los mausoleos referidos (ICC-01/12-01/15-70-AnxA-Corr 2015: párrafo 19).

Hacia fines de junio de 2012, los líderes de Ansar Dine, en consulta con los líderes de AQMI, tomaron la decisión de destruir nueve mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia. Si bien Al Mahdi estuvo de acuerdo en que el derecho islámico prohíbe las construcciones sobre tumbas, recomendó que no se destruyeran los mausoleos para no perjudicar las relaciones con los locales.

El 28 de junio de 2012, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aceptó el pedido del gobierno de Malí para colocar a Tombuctú en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2012).

Pese a sus objeciones iniciales, una vez recibida la instrucción de encargarse de la destrucción de los edificios referidos en su condición de jefe de la Hesbah, Al Mahdi procedió a determinar la secuencia en que serían destruidos y escribió un sermón anunciando su destrucción para ser leído en la oración del viernes previo al inicio del proceso (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 37).

Entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012, Al Mahdi supervisó la destrucción de los nueve mausoleos y de la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia.<sup>1</sup> Dichos edificios fueron destruidos con vehículos, armas, picos y barras

---

<sup>1</sup> Los mausoleos destruidos fueron los siguientes: Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit, Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, Alpha Moya, Sheikh Mouhamad El Micky, Sheikh Abdoul Kassim Attouaty, Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, Ahamed Fulane y Bahaber Babadié. Con excepción del Mausoleo Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, los restantes monumentos destruidos estaban en la lista de Patrimonio Mundial protegido.

de hierro. Al Mahdi participó activamente en la destrucción de la puerta sagrada y de al menos cuatro mausoleos (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafos 38-41).

El 1ro de julio de 2012, la Oficina de la Fiscalía emitió una declaración pública indicando que los “ataques” dirigidos y el daño deliberado contra mausoleos de santos musulmanes en la ciudad de Tombuctú podían constituir crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma (Situation in Mali 2013: párrafo 18). Asimismo, el 5 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la Resolución 2056 basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual enfatizó que los “ataques” contra edificios dedicados a la religión o monumentos históricos podían constituir violaciones al derecho internacional bajo el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 (PAII) y el Estatuto de Roma (United Nations Security Council 2012c: párrafo 16).

El 13 de julio de 2012, el gobierno de Malí refirió a la CPI “los crímenes más graves cometidos desde el mes de enero de 2012 en su territorio”, alegando la imposibilidad de las autoridades malienses de procesar y juzgar a sus autores. Al respecto, se refirieron “violaciones graves y masivas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas especialmente en la parte Norte del territorio”, incluyendo la destrucción de mausoleos y mezquitas (Situation in Mali 2013: párrafo 5).

El 20 de diciembre de 2012, el CSNU adoptó la Resolución 2085 bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas autorizando el despliegue de la Misión de Apoyo Internacional en Malí (AFISMA) para apoyar a las autoridades de Malí en la recuperación de las ciudades del norte del país. La resolución exhortó a AFISMA a apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales,

incluyendo aquellos de la CPI, para llevar ante la justicia a los perpetradores de serios abusos a los derechos humanos y violaciones al DIH (United Nations Security Council 2012a: párrafo 19).

El 16 de enero de 2013, la Fiscal de la CPI<sup>2</sup> decidió iniciar una investigación sobre la situación en Malí, concluyendo que la información disponible proveía una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de guerra en dicho contexto, incluyendo la dirección de “ataques” contra bienes protegidos de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma (Situation in Mali 2013: párrafo 173).

El 18 de septiembre de 2015, la Sala I de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de arresto contra Al Mahdi, quien fue arrestado en Níger y transferido a la CPI el 26 de septiembre de 2015. El 30 de septiembre de 2015, se inició la Fase de Cuestiones Preliminares con la presentación de Al Mahdi ante los jueces de la Sala I de Cuestiones Preliminares (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 1).

El 17 de diciembre de 2015, la Fiscal de la CPI presentó la acusación contra Al Mahdi, considerándolo responsable penalmente por el crimen de guerra de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios históricos y religiosos en la ciudad de Tombuctú de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv).

El 18 de febrero de 2016, las partes llegaron a un acuerdo de culpabilidad por el cual Al Mahdi aceptó el cargo y proveyó un recuento detallado de sus acciones (ICC-01/12-01/15-78-Anx1 2016). El 24 de marzo de 2016, la Sala I de

---

<sup>2</sup> La abogada gambiana Fatou Bensouda

Cuestiones Preliminares confirmó el cargo contra Al Mahdi, dando paso a la fase de enjuiciamiento del caso.

El 27 de septiembre de 2016, la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI declaró unánimemente a Al Mahdi culpable en la modalidad de coautor del crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios históricos y religiosos en Tombuctú y lo condenó a nueve años de prisión (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafos 63 y 109).

### **3. Identificación de los principales problemas jurídicos de la sentencia**

La correcta atribución de responsabilidad penal por la comisión del crimen de guerra contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma a Al Mahdi debido su participación admitida en la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en la ciudad de Tombuctú en el año 2012 depende, en primer lugar, de que dicha conducta se haya realizado en el contexto de un conflicto armado no internacional (CANI) y de que exista un nexo entre dicha conducta y el CANI referido.

Para establecer si la conducta de Al Mahdi tuvo lugar en el contexto de un CANI, será necesario verificar la concurrencia de los criterios de intensidad de hostilidades y organización colectiva de las partes concernidas. Asimismo, para establecer la vinculación de la conducta de Al Mahdi con el CANI referido, será necesario verificar que dicho CANI haya cumplido un papel sustancial en la decisión de Al Mahdi, en su capacidad para cometer el crimen o en la manera en que la que este fue cometido.

En segundo lugar, la correcta atribución de responsabilidad penal a Al Mahdi depende del sentido del término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma. Por tanto, es necesario establecer si la participación de Al Mahdi en la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en la ciudad de Tombuctú cuando esta se encontraba bajo el control de los grupos Ansar Dine y AQMI, sin que mediaran acciones de combate, configura un “ataque” de conformidad con la normativa relevante en materia de DIH y derecho penal internacional.

#### **4. Análisis y posición fundamentada sobre los problemas jurídicos de la sentencia**

La sentencia emitida por la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI respecto al caso Al Mahdi determinó que los elementos correspondientes al crimen de guerra consistente en “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, tipificado en el artículo 8(2)(e)(iv), estaban establecidos. De conformidad con el esquema previsto en los Elementos de los crímenes del Estatuto de Roma, la Sala VIII estuvo de acuerdo en que Al Mahdi estuvo a cargo de la ejecución de los “ataques” contra nueve mausoleos y la puerta de la mezquita Sidi Yahia, que dichos edificios calificaban como religiosos e históricos, que los “ataques” fueron dirigidos intencionalmente contra dichos edificios, que los “ataques” tuvieron lugar en el contexto de un CANI, que estaban relacionados con dicho CANI, y que Al Mahdi y los atacantes que lo acompañaban eran conscientes de las circunstancias de

hecho que establecían la existencia de dicho CANI (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafos 45-52).

En cuanto a las formas de responsabilidad, la Sala VIII consideró establecidos los elementos correspondientes a la coautoría, de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma. En este sentido, la Sala VIII estuvo de acuerdo en que Al Mahdi tuvo la responsabilidad de la ejecución de los “ataques”, determinando la secuencia de los mismos, llevando a cabo los arreglos logísticos necesarios y justificándolos a través de entrevistas en medios de comunicación. Asimismo, convino en que Al Mahdi supervisó personalmente los “ataques”, habiendo estado presente en todos los lugares “atacados” y habiendo participado directamente en la destrucción de cinco de los edificios. Finalmente, determinó que las contribuciones de Al Mahdi fueron hechas conforme a un acuerdo con otros que llevó a la comisión de los “ataques”, dado el papel de Al Mahdi en el liderazgo de Ansar Dine, la decisión tomada por los líderes de Ansar Dine y AQMI respecto a la destrucción de los edificios referidos, el sermón de Al Mahdi sobre dicha destrucción, su elección de la secuencia de la destrucción y la manera coordinada y deliberada en que se realizó (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafos 53-56).

Si bien la sentencia basó su análisis contextual en la información provista por el informe de la Oficina de la Fiscalía de la CPI sobre la situación en Malí, sumada a la información provista por Al Mahdi con ocasión del reconocimiento de su culpabilidad, hay dos aspectos que ameritan un examen más detallado en atención a la controversia que han suscitado a nivel doctrinario: la relación entre la conducta de Al Mahdi y el CANI que tenía lugar en Malí al momento de los

hechos y la calificación de dicha conducta como “ataque” en los términos del artículo 8(2)(e)(iv).

#### **4.1 ¿La destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos por parte de Al Mahdi está vinculada al CANI que tenía lugar en Malí al momento de los hechos?**

La vinculación de la conducta de Al Mahdi con el CANI que tenía lugar en Malí al momento de los hechos supone la verificación de los criterios de calificación de dicho CANI y la determinación de la condición de Al Mahdi con respecto al mismo; establecidos dichos presupuestos, se podrá analizar si la destrucción de los edificios referidos estuvo relacionada con el CANI o no.

##### **4.1.1 Calificación del CANI ocurrido en Malí al momento de la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú por parte de Al Mahdi**

De conformidad con la jurisprudencia internacional, se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados o cuando existe violencia armada prolongada entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre tales grupos dentro de un Estado (IT-94-1, Appeals Chamber, 1995: párrafo 70). Los conflictos armados pueden ser internacionales o no internacionales.



Desde su primera sentencia en el caso Lubanga -siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)-, la CPI ha caracterizado al CANI como el estallido de hostilidades armadas de un cierto nivel de intensidad que excede aquel de los disturbios interiores y las tensiones internas, y que tiene lugar en los confines del territorio de un Estado. Dichas hostilidades pueden ocurrir (i) entre autoridades gubernamentales y grupos armados disidentes organizados o (ii) entre tales grupos (ICC-01/04-01/06-2842 2012: párrafo 533).

Basándonos en los desarrollos jurisprudenciales referidos y en la práctica de los Estados, podemos definir CANI en los siguientes términos empleados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR):

Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima (Comité Internacional de la Cruz Roja 2008: 6).

Con relación al criterio de organización, se parte de considerar que las fuerzas armadas estatales están organizadas. En cuanto al grupo armado no estatal, se deben verificar ciertas condiciones: “while the group does not need to have the level of organisation of state armed forces, it must possess a certain level of hierarchy and discipline and the ability to implement the basic obligations of IHL” (Droege 2012: 550). La jurisprudencia del TPIY ha identificado algunos factores indicativos para la verificación del criterio de organización respecto a los grupos armados no estatales, tales como la existencia de una estructura de

mando, la existencia de reglas y mecanismos disciplinarios, la capacidad de reclutar, equipar y entrenar personal, la capacidad de planificar, coordinar y realizar operaciones militares, el control de cierto territorio y la capacidad de negociar y concertar acuerdos (IT-04-84-T, Trial Chamber I 2008: párrafo 60).

Con relación al criterio de inteidad, este se considera cumplido cuando “las hostilidades son de índole colectiva o cuando el gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar de recurrir únicamente a las fuerzas de policía” (Comité Internacional de la Cruz Roja 2008: p. 4). Al respecto, se entiende que el criterio de intensidad excluye las situaciones de disturbios interiores y tensiones internas, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos. La jurisprudencia del TPIY ha identificado algunos factores indicativos para la verificación del criterio de intensidad, tales como la gravedad de los ataques, la propagación de los enfrentamientos por el territorio y a lo largo del tiempo, el aumento en el número y la movilización de fuerzas gubernamentales, la distribución de armas entre las partes, los tipos de armas empleadas, el bombardeo, el bloqueo o el sitio de ciudades, la magnitud de la destrucción y el número de víctimas, el número de civiles obligados a huir de las zonas de combate, la adopción de resoluciones por parte del CSNU y las órdenes y acuerdos de cese de las hostilidades (IT-04-84-T, Trial Chamber I 2008: párrafo 49).

La Sala VIII de Primera Instancia de la CPI manifestó su conformidad respecto a que la conducta de Al Mahdi tuvo lugar en el contexto de un CANI entre fuerzas gubernamentales malienses y grupos armados organizados, incluido Ansar Dine. (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 49). Si bien la sentencia

no se explayó en la fundamentación de dicha conformidad, esta puede buscarse en el informe de la Oficina de la Fiscalía sobre la situación en Mali, donde se analizaron los criterios de calificación de CANI referidos (Situation in Mali 2013: párrafos 59-83).

#### **4.1.1.1 Criterio de organización**

En relación con el criterio de organización, el informe de la Oficina de la Fiscalía identificó a las siguientes partes: las Fuerzas Armadas Malienses, el MNLA, AQMI, Ansar Dine y el MUJAO. Sobre las Fuerzas Armadas Malienses, el informe señaló que estas constituían un ejército convencional, con líneas claras de comando y control, y entre 12,150 y 15,150 miembros hacia 2011 (Situation in Mali 2013: párrafos 76-83).

En cuanto al MNLA, el informe lo calificó como un grupo armado compuesto por alrededor de 10,000 miembros con función continua de combate<sup>3</sup>, bajo el mando de Bilal Aq Cherif. Según el informe, el MNLA había demostrado la habilidad de planear y ejecutar operaciones militares por un período de tiempo prolongado cuando sostuvo enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas Malienses entre enero y marzo de 2012.

En cuanto a AQMI, el informe lo calificó como un grupo armado compuesto por alrededor de 400-800 miembros con función continua de combate. AQMI

---

<sup>3</sup> De conformidad con la Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario publicada por el CICR, “la función continua de combate exige una integración duradera en un grupo armado organizado que actúe como las fuerzas armadas de una parte no estatal en un conflicto armado” (Melzer 2015: 34).

estaba dividido en unidades militares centrales o brigadas (denominadas “*katiba*”), cada una bajo el mando de un comandante.

En cuanto a Ansar Dine, el informe lo calificó como un grupo armado compuesto por alrededor de 400 miembros con función continua de combate y entrenamiento en campos, bajo el mando de Iyad Ag Ghaly. El informe refirió que Ansar Dine tuvo la capacidad de conseguir, transportar y distribuir armas venidas de Libia, así como de gobernar partes del territorio a través de consejos locales establecidos en las ciudades bajo su control, incluida Tombuctú.

Finalmente, en cuanto al MUJAO, el informe estimó sus fuerzas en 300 miembros con función continua de combate liderados por el Sultán Ould Badi. Según el informe, el MUJAO participó en la rebelión en el norte de Malí, habiendo realizado operaciones militares junto a Ansar Dine.

Si bien AQMI, Ansar Dine y el MUJAO participaron en la rebelión iniciada por el MNLA en el norte de Malí, sus diferencias terminaron por enemistarlos. Mientras el MNLA era un grupo separatista, formado con la intención de reivindicar la independencia de dicha zona para los tuareg, AQMI, Ansar Dine y el MUJAO eran grupos salafistas-yihadistas cuya pretensión era imponer la ley sharia en el país. “While the MNLA was demanding independence for the Azawad region, Islamist armed groups prioritized religious claims against the secularity of the Malian State” (Roetman, Migeon y Dudouet 2019: 7).

En este sentido, el informe diferenció dos fases en el CANI en Malí durante el año 2012: una primera, en la que el MNLA, AQMI, Ansar Dine y el MUJAO enfrentaron a las Fuerzas Armadas Malienses, expulsándolas de la zona norte; y una segunda, en la que AQMI, Ansar Dine y el MUJAO tomaron el control de

dicha zona, expulsando al MNLA, y con intentos recurrentes de las Fuerzas Armadas Malienses por retomar el control (Situation in Mali 2013: párrafo 4).

Dado que Ansar Dine era la agrupación de la que formaba parte Al Mahdi, cabe destacar algunas de sus características más allá de las reseñadas en el informe de la Oficina de la Fiscalía. De conformidad con el perfil del grupo armado elaborado por la Universidad de Stanford, Ansar Dine habría llevado a cabo operaciones militares en las ciudades de Kidal, Bamako, Tombuctú, Segou, Sikasso, Koulikoro y Gao; sobre sus objetivos y tácticas, el perfil señala que los miembros de Ansar Dine habrían recurrido a ataques suicidas, vehículos cargados de explosivos, misiles, morteros, granadas y rifles para debilitar a sus objetivos principales, incluyendo a militares malienses y al MNLA. En diciembre de 2012, Ansar Dine participó en negociaciones con el gobierno de Burkina Faso y el MNLA para el cese de las hostilidades, aunque estas no llevaron a una paz duradera (Stanford 2018).

#### **4.1.1.2 Criterio de intensidad**

En relación con el criterio de intensidad, después de analizar la fase correspondiente a la rebelión en el norte -fecha del 17 de enero al 1ro de abril de 2012-, el informe de la Oficina de la Fiscalía analizó la fase correspondiente a los enfrentamientos entre el MNLA y AQMI, Ansar Dine y el MUJAO, durante la cual tuvo lugar la destrucción de los edificios religiosos y monumentos históricos en Tombuctú por parte de Al Mahdi (Situation in Mali 2013: párrafos 67-75).

Al respecto, el informe señaló que dichos enfrentamientos empezaron inmediatamente después de la retirada de las Fuerzas Armadas Malienses de la zona norte de Malí. Según el informe, Ansar Dine tomó el control de Tombuctú el 2 de abril de 2012, registrándose enfrentamientos entre Ansar Dine y el MNLA en Kidal el 7 de junio de 2012 y en Tombuctú el 13 de junio de 2012. Asimismo, el informe señaló que el MUJAO se habría enfrentado al MLNA en Gao el 27 de junio de 2012. El informe fechó la expulsión del MNLA de la zona el 11 de julio de 2012, luego de la toma de Ansongo por parte de Ansar Dine y el MUJAO. La Oficina de la Fiscal de la CPI consideró que el CANI continuaba a la fecha de la publicación del informe.

El informe no se extendió en la dinámica de las hostilidades, pero algunos reportes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, *think tanks* y medios de comunicación, ofrecieron información útil para la verificación del criterio de intensidad.

Un informe de la organización no gubernamental *Armed Conflict Location and Event Data Project* señaló que durante el año 2012 en Malí se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Malienses y grupos armados no gubernamentales, violencia por parte de las Fuerzas Armadas Malienses en contra de civiles, enfrentamientos entre grupos armados no gubernamentales y ataques de grupos armados no gubernamentales en contra de civiles (Matfess 2019).

Una vez consolidado el control de los grupos salafistas-yihadistas en el norte de Malí, los reportes aludieron a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas Malienses por recuperar la zona: “The main conflict line thus pitted the Malian

army and its military allies [...] against the Salafi jihadi forces, while the MNLA struggles to remain a relevant stakeholder” (Roetman, Migeon y Dudouet 2019: 14).

Durante el año 2012, el CSNU emitió una serie de resoluciones sobre Malí bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas relativo a la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. En la Resolución 2056 del 5 de julio de 2012, el CSNU condenó el ataque iniciado y llevado a cabo por grupos rebeldes contra las Fuerzas Armadas Malienses y civiles (United Nations Security Council 2012c: párrafo 1) e hizo un llamado para que todas las partes en el Norte de Malí cesaran las violaciones al DIH (United Nations Security Council 2012c: párrafo 13). Un llamado similar se realizó en la Resolución 2071 del 12 de octubre de 2012 (United Nations Security Council 2012b: párrafo 5), mientras que en la Resolución 2085 del 20 de diciembre de 2012 se autorizó el despliegue de la AFISMA, exhortándola a apoyar los esfuerzos para llevar ante la justicia a los perpetradores de violaciones al DIH (United Nations Security Council 2012a: párrafo 19).

La información complementaria referida apoya las conclusiones de la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI respecto a la verificación de los criterios de organización e intensidad y, por ende, respecto a la existencia de un conflicto armado en Malí al momento de la destrucción de los nueve mausoleos y la puerta de la mezquita Sidi Yahia.

#### **4.1.2 Condición de Al Mahdi con respecto al CANI ocurrido en Malí al momento de la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú**

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI refirió que Al Mahdi retornó a Malí desde Argelia a inicios de abril de 2012 para apoyar a Ansar Dine y AQMI en el control de Tombuctú, entablando contacto directo con el líder de Ansar Dine, Iyad Ag Gahly, y con los líderes impuestos por AQMI en la ciudad (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 32). Según contó el propio Al Mahdi en una entrevista concedida a la UNESCO, “Ag Ghali llegó acompañado por un grupo de Al Qaeda. Su discurso me impresionó y sus ideas me convencieron. De inmediato declaré mi adhesión a su movimiento” (Barrak, 2016).

Al Mahdi fue nombrado jefe de la Hesbah, brigada encargada de regular la moral en Tombuctú. Dicho nombramiento fue señalado en el documento donde Al Mahdi reconoció su culpabilidad como el momento en que Al Mahdi pasó a integrar Ansar Dine: “A partir de ce moment-là, M. **AL MAHDI** a fait partie des membres locaux qui ont rejoint le groupe armé Ansar Dine et soutenu son action à Tombouctou” (ICC-01/12-01/15-78-Anx1 2016: párrafo 8). Asimismo, en el documento referido se indicó que Al Mahdi reclutó a los integrantes de la Hesbah en los campos de entrenamiento de Ansar Dine, que se encargó de evaluar la situación de un campamento del MNLA que quería integrarse a Ansar Dine y que se encargó de instruir a los nuevos reclutas de Ansar Dine sobre los objetivos del grupo (ICC-01/12-01/15-78-Anx1 2016: párrafos 11-20).



En tanto jefe de la Hesbah, el acto más notorio de Al Mahdi fue la destrucción de nueve mausoleos y de la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia, cuya secuencia determinó y cuya ejecución supervisó, llegando a participar activamente en la destrucción de la puerta sagrada y de al menos cuatro mausoleos. Sin embargo, organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Maliense de Derechos Humanos han llamado la atención sobre otras prácticas atribuidas a Al Mahdi en una denuncia interpuesta ante la justicia maliense: “En esta denuncia se acusa a Al Mahdi y a otras 14 personas de haber cometido crímenes de guerra así como crímenes de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales y por motivos de género” (FIDH 2016).

Si bien la sentencia de la Sala VIII analizó la conducta de Al Mahdi hasta el momento inmediatamente posterior a la destrucción de los edificios referidos, la revisión de su conducta ulterior resulta relevante para la determinación de su condición con relación al CANI. A este respecto, la FIDH señaló en una nota de prensa que Al Mahdi habría participado en la lucha contra las Fuerzas Armadas Malienses después de dejar su cargo de jefe de la Hesbah: “After leading the Islamic Police in Timbuktu, he likely left to fight against the French and Malian armed forces in Konna in January 2013 before retreating to northern Mali and crossing into Niger where he was arrested” (International Federation for Human Rights, 2015).

A pesar de que la sentencia de la Sala VIII privilegió la caracterización del Al Mahdi como un líder religioso, la información complementaria reseñada permite concluir que la condición de Al Mahdi con respecto al CANI ocurrido en

Malí al momento de la destrucción de los edificios referidos era la de miembro del grupo armado Ansar Dine. De conformidad con el CICR, “según el DIH, el criterio decisivo para que exista la calidad de miembro en un grupo armado organizado es que una persona asuma una función continua para el grupo y que esa comprenda su participación directa en las hostilidades” (Melzer 2015: 33).

La vigilancia de la moral ejercida por Al Mahdi sobre la población de Tombuctú a través de la Hesbah era una garantía del control del territorio -en disputa tanto con el MNLA como con las Fuerzas Armadas Malienses- por parte de Ansar Dine; según la FIDH, “As head of the Islamic police, he was one of the four commanders of Ansar Dine responsible for the brutal imposition of power of jihadist armed groups in Timbuktu” (International Federation for Human Rights 2015). A este respecto, el mismo Al Mahdi reconoció haber reclutado a los integrantes de la Hesbah en los campos de entrenamiento de Ansar Dine.

Finalmente, fue el mismo Al Mahdi quien reconoció su pertenencia a Ansar Dine, más allá de sus funciones como jefe de la Hesbah, habiendo permanecido en el grupo después de dejar dicho cargo; de conformidad con el CICR “La función continua de combate exige una integración duradera en un grupo armado organizado que actúe como las fuerzas armadas de una parte estatal en un conflicto armado” (Melzer 2015: 34). Por tanto, más allá de haber sido un líder religioso, Al Mahdi fue miembro del grupo armado organizado Ansar Dine, parte en el CANI ocurrido en Malí al momento de la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú.

#### **4.1.3 Relación entre la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos por parte de Al Mahdi y el CANI que tenía lugar en Malí al momento de los hechos**

Los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma establecen que la conducta atribuida al autor del crimen de guerra consistente en dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos debe haber tenido lugar en el contexto de un CANI y haber estado relacionada con él.

Al respecto, la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI sostuvo que el “ataque” contra los nueve mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia no habría sido posible si Ansar Dine y AQMI no hubieran conquistado Tombuctú (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 50).

De acuerdo con el testimonio de Al Mahdi, la decisión de destruir los edificios referidos fue tomada por el líder de Ansar Dine, Iyad Ag Gahly, en consulta con el “gobernador” impuesto por los grupos salafistas-yihadistas en Tombuctú, Abou Zeid, comandante de la *katiba* (brigada militar) Tarek Ibn Zeyad de AQMI. Asimismo, según Al Mahdi, el sustento de la destrucción fue provisto por otro líder religioso-militar, Abdallah Al Chinguetti, miembro de la *katiba* Al Fourqane (ICC-01/12-01/15-78-Anx1 2016: párrafo 36). Por tanto, podemos afirmar que dicha decisión provino de los líderes militares de mayor jerarquía de los grupos armados en control de Tombuctú.

Asimismo, la Sala VIII señaló que las justificaciones esgrimidas durante el “ataque” por parte de ambos grupos fueron las mismas ofrecidas con ocasión de

la toma de Tombuctú y del norte de Malí en general, es decir, la imposición de la ley sharia. La Sala VIII citó testimonios de habitantes de Tombuctú en este sentido: “destroying the mausoleums, to which the people of Timbuktu had an emotional attachment, was a war activity aimed at breaking the soul of the people of Timbuktu” (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 80).

La sentencia de la Sala VIII consideró que Al Mahdi, en tanto estaba basado en Tombuctú y trabajaba de conformidad con la administración de Ansar Dine y AQMI, estaba al tanto de las circunstancias de hecho que determinaban la existencia del CANI. Asimismo, cabe destacar que, una vez iniciado el proceso de destrucción de los edificios referidos, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aceptó el pedido del gobierno de Malí para colocar a Tombuctú en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, con la finalidad de recabar cooperación y apoyo para los sitios amenazados por la situación que calificó como “conflicto armado”: “The World Heritage Committee [...] accepted the request of the Government of Mali to place Timbuktu and the Tomb of Askia on UNESCO’s List of World Heritage in Danger. The decision aims to raise cooperation and support for the sites threatened by the armed conflict in the region” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2012).

Como ha reconocido la CPI desde el caso Lubanga, para que se configure un crimen de guerra el conflicto armado debe cumplir un papel sustancial en la decisión del perpetrador, en su capacidad para cometer el crimen o en la manera en la que la conducta fue cometida. Al respecto, la CPI ha enfatizado que no es necesario que el conflicto armado sea la razón última para la conducta ni que la conducta tenga lugar en el medio del combate:

In this respect, the Chamber follows the approach of the jurisprudence of the ICTY, which requires the conduct to have been closely related to the hostilities occurring in any part of the territories controlled by the parties to the conflict. The armed conflict need not be considered the ultimate reason for the conduct and the conduct need not have taken place in the midst of battle. Nonetheless, the armed conflict must play a substantial role in the perpetrator's decision, in his or her ability to commit the crime or in the manner in which the conduct was ultimately committed (ICC-01/04-01/06-803-tEN, Pre-Trial Chamber I 2007: párrafo 287).

Pese a las precisiones referidas, la sentencia de la Sala VIII ha sido criticada por algunos autores con relación a la atribución de una relación entre la conducta de Al Mahdi y el CANI en Malí. Para William Schabas, la destrucción de los edificios referidos no debería vincularse al CANI en la medida en que aquellos no constituían objetivos militares. "The destruction of the structures was in pursuit of Ansar Dine's extremist ideology and would undoubtedly have taken place had the group been able to take and hold power without the use of force" (2017: 97).

En opinión de Schabas, el hecho de que Ansar Dine ejerciera el control de Tombuctú como resultado de un conflicto armado no debería tener como correlato la vinculación de todos los esfuerzos del grupo armado por mantener dicho control con el CANI referido: "Their only relationship with the armed conflict is chronological: they follow the seizure of power. Yet the observation that a group may be in a position to do things after it has taken power that it was not previously able to do hardly seems an adequate nexus for crimes war law to apply" (2017: 97).

Al respecto, la jurisprudencia previamente citada es clara en señalar que la relación entre la conducta del perpetrador y el CANI se ve satisfecha si el CANI

en cuestión cumple un papel sustancial en su decisión, su capacidad o su *modus operandi*, supuestos que en el caso de Al Mahdi pueden verificarse.

La decisión de destruir los edificios referidos fue tomada por los líderes militares de los grupos armados en control de Tombuctú. La capacidad de Al Mahdi de planear, preparar y llevar a cabo la destrucción de dichos edificios dependía del control ejercido por los grupos armados y fue llevada a cabo por miembros de dichos grupos, escogidos en sus campos de entrenamiento. El acceso a los medios con los que se procedió a la destrucción y la capacidad de emplearlos dependían también de este control.

Asimismo, cabe recordar que uno de los indicadores identificados por la jurisprudencia en cuanto a la verificación del criterio de organización en un CANI es el control de cierto territorio. Pretender que, una vez ejercido el control, la destrucción de bienes protegidos por el DIH no podría considerarse relacionada al conflicto para efectos de su sanción como crimen de guerra pondría en entredicho el alcance de la protección referida.

Por consiguiente, dado que el CANI en Malí cumplió un papel sustancial en la decisión, la capacidad y el *modus operandi* relativos a la destrucción de los bienes referidos por parte de Al Mahdi, podemos considerar verificado el elemento de vinculación entre el CANI y su conducta.

#### **4.2 ¿La conducta de Al Mahdi califica como “ataque” en los términos del artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma?**

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI estableció que el “ataque” contra los nueve mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia se llevó a cabo entre el 30 de junio (fecha aproximada) y el 11 de julio de 2012. La Sala VIII señaló que dichos edificios calificaban como edificios dedicados a la religión y como monumentos históricos, basándose en el papel que cumplían en la vida cultural en Tombuctú y en el estatus de nueve de ellos como Patrimonio Mundial protegido de la UNESCO (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 46).

Al analizar la gravedad del crimen cometido para la atribución de la pena, la Sala VIII volvió a pronunciarse sobre los edificios referidos, basándose en los testimonios recabados para evidenciar su importancia: “The mausoleums were among the most cherished buildings of the city and they were visited by the inhabitants of the city, who used them as a place for prayer while some used them as pilgrimage locations” (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 78).

La referencia hecha por la Sala VIII al impacto de la destrucción de los bienes referidos en la comunidad internacional fue destacada por algunos autores: “The decision to recognize the international community as a victim in this case is well-founded on the facts, in particular the intention of the perpetrators to destroy heritage cherished by the world community” (Gottlieb 2020: 317). El hecho de que la sentencia reconociera la dimensión local y universal de la afectación fue saludado como un desarrollo positivo: “These views are not necessarily mutually exclusive and can be helpful in dealing with the destruction of cultural heritage in different contexts. It is important to note that in most cultural

heritage crimes, victims will be found both at local and international level” (Curci 2019: 180).

Por tanto, podemos concluir que los 9 mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia cumplían la condición de ser edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en los términos del artículo 8(2)(e)(iv).

#### **4.2.1 Definición de “ataque” en el derecho internacional humanitario**

En cuanto a la calificación de la conducta de Al Mahdi como “ataque”, la sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI consideró que el elemento “dirigir intencionalmente ataques” del artículo 8(2)(e)(iv) abarca todo acto de violencia contra bienes protegidos y señaló que no haría distinción respecto a si este se había llevado a cabo en el marco de la conducción de hostilidades o después de que el bien cayera bajo el control del grupo armado. Al respecto, la sentencia refirió que el Estatuto de Roma no realiza dicha distinción en virtud al “estatus especial” de los bienes protegidos: “This reflects the special status of religious, cultural, historical and similar objects, and the Chamber should not change this status by making distinctions not found in the language of the Statute. Indeed, international humanitarian law protects cultural objects as such from crimes committed both in battle and out of it” (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 15).

Al referirse a las normas de DIH relativas a la protección de bienes culturales, la sentencia aludió al Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre anexo a la Convención IV relativa a las Leyes y



Costumbres de la Guerra Terrestre de 1907, al Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, al Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 (PAI) y al PAII.

El Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre dispone, por separado, que en los sitios y bombardeos se tomen las medidas necesarias para favorecer los edificios destinados al culto y los monumentos históricos (artículo 27), y la prohibición de la destrucción de los establecimientos consagrados a los cultos y de los monumentos históricos (artículo 56).

Por su parte, el artículo 15 del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 considera una infracción hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada, así como hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención de La Haya y el Segundo Protocolo. De otro lado, considera una infracción causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el Segundo Protocolo.

Finalmente, el artículo 53 del PAI y el artículo 16 del PAII contienen la prohibición de cometer “actos de hostilidad” dirigidos contra los monumentos históricos o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos.

De conformidad con el comentario del PAI publicado por el CICR con relación al artículo 53, “acto de hostilidad” ha de entenderse como “todo acto relacionado con el conflicto que cause o pueda causar un daño material a los bienes protegidos. En efecto, el artículo no prohíbe solamente los ataques, sino también cualquier acto *dirigido* contra los bienes protegidos” (Sandoz y otros

2000: párrafo 2070, Tomo II). La misma interpretación se consigna en el comentario del PAII publicado por el CICR con relación al artículo 16 (Junod y otros 1998: párrafo 4845). Sobre el particular, podemos identificar opiniones similares en la doctrina especializada: “the use of the term “acts of hostility” instead of “attacks” indicates that the prohibition is applicable to Party’s own very important cultural and spiritual objects. Thus, the Article prohibits the destruction of any specially protected objects, by any Party to the conflict, either by way of attack or by demolition of objects under its control” (Bothe, Partsch y Solf 2013: 375).

Dicha posición también ha sido sustentada por expertos que han presentado *amicus curiae* en procesos judiciales ante la CPI: “An ‘act of hostility’ directed against cultural property refers to an act of violence against cultural property not only when the property is under control of an opposing party but also where it is under the control of the party directing the violence. An act of hostility encompasses the property’s hands-on demolition” (ICC-01/04-02/06-2585 2020: párrafo 5).

En consecuencia, si bien podemos concluir que el DIH protege a los edificios dedicados a la religión y a los monumentos históricos de cualquier daño material por parte de las partes en conflicto, las normas correspondientes reconocen como causas diferentes del daño “ataque” y “destrucción”.<sup>4</sup>

El término “ataque” está definido en el artículo 49(1) del PAI como “los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos”. El

---

<sup>4</sup> Asimismo, en el Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario del CICR se consignan, por separado, la prohibición de ataques (Norma 38) y de destrucción (Norma 40) de bienes culturales.

comentario del PAI publicado por el CICR precisa: “Dicho de otro modo, la palabra “ataque” significa ‘acción de combate’” (Sandoz y otros 2000: párrafo 1880, Tomo II). Asimismo, en el comentario del PAII publicado por el CICR se precisa que el uso del término “ataque” en dicho tratado tiene el mismo sentido que en el PAI (Junod y otros 1998: párrafo 4783).

Así definido, un “ataque” constituye un acto de hostilidad que conlleva la aplicación de los principios de DIH relativos a la elección de blancos (*targeting*), particularmente los de distinción, precaución y proporcionalidad.<sup>5</sup> Pretender que “ataque” equivalga a todo acto de hostilidad, incluyendo aquellos que no se cometan contra el adversario, desnaturalizaría el alcance protector de estos principios: “An interpretation of IHL that categorizes every act of violence resulting in damage, destruction, or loss of property as an attack -therefore requiring the application of targeting rules- is inconsistent with IHL and would undermine that law’s practical application to military operations” (ICC-01/04-02/06-2589 2020: párrafo 8).

#### **4.2.2 Interpretación del sentido del término “ataque” en el Estatuto de Roma**

Si bien el término “ataque” no está definido en el Estatuto de Roma, las referencias hechas en el encabezado del artículo 8(2)(e) a “el marco establecido

---

<sup>5</sup> De conformidad con el Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario del CICR, por distinción se entiende que “Las partes en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares” (Norma 7); por precaución se entiende que “las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a [...] los bienes de carácter civil” (Norma 15); y por proporcionalidad se entiende que “queda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente [...] daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” (Norma 14).

de derecho internacional” y en el artículo 21(1)(b) a la aplicación de “los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados” remiten a las normas de DIH, incluida la definición de “ataque” contenida en el artículo 49(1) del PAI.

En este sentido, la propia jurisprudencia de la CPI ha señalado que los crímenes de guerra consistentes en “ataques” se cometen contra personas o bienes que no hayan caído en poder del adversario. Así, en la Decisión sobre la confirmación de los cargos en el caso Katanga, la Sala I de Primera Instancia señaló:

the war crime provided for in article 8(2)(b)(i) of the Statute is the first in the series of war crimes for which one essential element is that the crime must be committed during the conduct of hostilities [...] Accordingly, this crime is applicable only to attacks (acts of violence) directed against individual civilians not taking direct part in the hostilities, or a civilian population, that has not yet fallen into the hands of the adverse or hostile party to the conflict to which the perpetrator belongs (ICC-01/04-01/07-717 2008: párrafo 267)

Puntualizando el caso del ataque contra bienes protegidos, la Sala II de Primera Instancia de la CPI en el caso Ntaganda estableció: “in principle, any conduct, including ... attacks on protected objects and destruction of property, may constitute an act of violence for the purpose of the war crime of attacking civilians, provided that the perpetrator resorts to this conduct as a method of warfare and, thus that there exists a sufficiently close link to the conduct of hostilities” (ICC-01/04-01/06-309 2014: párrafo 45).

En opinión de la Sala II de Primera Instancia de la CPI en el caso Ntaganda, el vínculo referido entre la destrucción de propiedad y la conducción

de hostilidades no existe cuando los actos de violencia son cometidos contra civiles que han caído bajo el control del perpetrador: “this sufficiently close link between acts of violence underlying the ‘attack’ and the actual conduct of hostilities does not exist when the acts of violence (such as [...] destruction of property) are committed against civilians that have fallen into the hands of the attacking party or are committed far from the combat area” (ICC-01/04-01/06-309 2014: párrafo 47).

Cuando la Sala VIII de Primera instancia de la CPI en el caso Al Mahdi estableció que “dirigir intencionalmente ataques” abarca cualquier acto de violencia contra bienes protegidos y que no haría distinción respecto a si los mismos habían sido llevados a cabo en el marco de la conducción de hostilidades o después de que el bien cayera bajo el control de un grupo armado (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 15), lo hizo invocando únicamente el “estatus especial” de los bienes religiosos, culturales, históricos y similares, señalando que el DIH protege dichos bienes como tales de crímenes cometidos tanto en combate como fuera de él: “cultural objects in non-international armed conflicts are protected as such, not generically as civilian objects, only in Article 8(2)(e)(iv), which makes no distinction between attacks made in the conduct of hostilities or afterwards” (ICC-01/12-01/15-171 2016: párrafo 16).

Dado que Al Mahdi aceptó ser responsable de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, la sentencia de la Sala VIII no fue apelada y su argumentación respecto al sentido del término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) no fue contradicha por la defensa en el marco del proceso; sin embargo, algunos autores señalaron que

la interpretación de la Sala VIII iba más allá de dicho sentido: “This interpretation is broader than the protections afforded by prior conventions, which primarily protect cultural heritage during military hostilities, and the explicit text of the Rome Statute” (Cole 2017: 455).

La argumentación de la Sala VIII respecto al sentido del término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) ha sido señalada como insuficiente: “international humanitarian law protects cultural objects both in battle and out of it, but that is hardly an argument to support the application of a provision that is clearly directed at acts perpetrated during a battle to those that take place ‘out of it’” (Schabas 2017: 82). Para los autores críticos de la sentencia referida, más que demostrar la pretendida amplitud de dicho sentido, la Sala VIII mezcló equivocadamente la protección contra un “ataque” y la protección contra un acto de “destrucción”: “la Chambre appréhende mal le problème en faisant un mélange de genres entre les règles relatives à la conduite des hostilités et celles qui concernent la protection des biens au pouvoir de l’ennemi” (Ouedraogo 2017: 106).

La discusión sobre el tema ha sido retomada recientemente por la CPI con ocasión del caso Ntaganda, en el cual la Fiscal acusó a Bosco Ntaganda, exjefe adjunto del Estado Mayor y de las Fuerzas Patrióticas para la liberación del Congo, de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión por el saqueo y el daño a la infraestructura de una iglesia durante una redada en la localidad congoleña de Sayo (ICC-01/04-02/06-203-AnxA 2014: párrafo 72, Count 17).

Contrariando el razonamiento de la Sala VIII de Primera Instancia en el caso Al Mahdi, la Sala VI de Primera Instancia en el caso Ntaganda sostuvo que el sentido del término “ataque” en el artículo 8(2)(e)(iv) pertenece a la categoría de crímenes que se cometen durante la conducción de hostilidades: “As with the war crime of attacking civilians, the crime of attacking protected objects belongs to the category of offenses committed during the actual conduct of hostilities” (ICC-01/04/-02/06-2359 2019: párrafo 1136). Basándose en dicho razonamiento, la Sala VI de Primera Instancia desestimó el cargo referido: “given that the attack on the church in Sayo took place after the assault, and therefore not during the actual conduct of hostilities, the Chamber finds that the first element of Article 8(2)(e)(iv) of the Statute is not met” (ICC-01/04/-02/06-2359 2019: párrafo 1142).

La sentencia de la Sala VI de Primera Instancia en el caso Ntaganda motivó la apelación de la Oficina de la Fiscalía, permitiendo que esta se extienda en la argumentación sobre el pretendido estatus especial de los bienes referidos en el artículo 8(2)(e)(iv) que la Sala VIII de Primera Instancia en el caso Al Mahdi había invocado en su sentencia.

En su escrito de apelación, la Fiscal refirió que una interpretación adecuada del artículo 8(2)(e)(iv) debería llevar a considerarlo una regla especial en razón al régimen de protección del que gozan los bienes referidos en el mismo: “article 8(2)(e)(iv) constitutes a special rule insofar as the objects to which it refers enjoy a particular regime of protection which is different from civilian objects and property under control of the adverse party. For this reason, it is unsurprising that the term ‘attack’ in article 8(2)(e)(iv) must be accorded a special

meaning [...] which is different from its meaning elsewhere in article 8” (ICC-01/04-02/06-2432 2019: párrafo 19).

Pese a reconocer que la definición de “ataque” en el DIH es aquella contenida en el artículo 49(1) del PAI y que en dicha rama del derecho se emplean otros términos para la descripción de actos de violencia ajenos a la conducción de hostilidades, la Fiscal consideró que solo atribuyendo un significado especial al término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) podemos interpretar dicha provisión de manera consistente con el derecho internacional vigente (ICC-01/04-02/06-2432 2019: párrafo 30).

Según la apelación de la Fiscal, el artículo 8(2)(e)(iv) es la única disposición aplicable en conflictos armados no internacionales que concede protección a bienes debido a su naturaleza particular y no mediante una protección genérica. “While such objects could theoretically be protected under article 8(2)(e)(xii) as ‘property of and adversary’, this provision is not an adequate substitute for the protection in article 8(2)(e)(iv)” (ICC-01/04-02/06-2432 2019: párrafo 59). En opinión de la Fiscal, la ubicación del artículo 8(2)(e)(iv) como un crimen separado refleja el principio de *fair labelling*, es decir, la exigencia de nombrar con claridad, certeza y precisión los comportamientos considerados como delictivos (ICC-01/04-02/06-2432 2019: párrafo 63).

En su respuesta a la apelación de la Fiscal, la Defensa de Ntaganda señaló que no existen argumentos jurídicos para considerar que el sentido del término “ataque” en el artículo 8(2)(e)(iv) deba ser diferente al establecido en las normas de DIH concernidas y en el artículo 8 en su conjunto:



article 8(2)(e)(iv) refers to a deliberately chosen term of art (“attack”) which has a well-established meaning “within the [...] framework of international law”. API is a core component of international humanitarian law. (“IHL”). Article 49 of API, which is entitled “Definition of attacks and scope of application”, states at paragraph 1 that “[a]ttacks’ means acts of violence against the adversary, whether in offence or defence.” The term “attack”, thus, means “combat action” (ICC-01/04-02/06, Defence Team of Mr. Bosco Taganda 2019: párrafo 7).

Sobre la interpretación del artículo 8 en su conjunto, la Defensa de Ntaganda señaló:

when the term “attack” is considered in the context of the Statute as a whole, there is no basis for arguing that, when it is used in article 8(2)(e)(iv), the term should be interpreted differently from its use in other sub-paragraphs of article 8 and as referring to acts which take place both during and outside the conduct of hostilities. Instead, such an analysis establishes that the word “attack” was deliberately chosen to describe conduct occurring during hostilities only” (ICC-01/04-02/06-2449 2019: párrafo 11).

La controversia respecto al sentido del término “ataque” en el artículo 8(2)(e)(iv) planteada con ocasión del caso Ntaganda motivó que la Sala de Apelaciones considerara deseable recibir las respuestas de expertos calificados respecto a cómo se define “ataque” en el DIH, particularmente en el contexto de bienes culturales, y qué significa el término “ataque” en el artículo 8(2)(e)(iv) (ICC-01/04-02/06-2554 2020: párrafo 15).

Si bien la generalidad de respuestas enviadas coincidió en definir “ataque” de conformidad con el artículo 49(1) del PAI, las repuestas relativas al significado de “ataque” en el artículo 8(2)(e)(iv) difirieron en los mismos términos de la controversia que motivó la consulta. Los argumentos favorables a la posición de la Fiscal partieron de la misma pretendida necesidad de dar al término “ataque” un sentido más allá de la definición prevista en el DIH debido a la protección

especial que ameritarían los bienes referidos en el artículo bajo análisis: “The Amici submit that the human element of Article 8(2)(e)(iv) must be taken into account [...] In the war crime of destruction of cultural property under Article 8(2)(e)(iv), the victim is not the object or buildings damaged or destroyed, but the humans who give the site meaning” (ICC-01/04-02/06-2588 2020: párrafo 12).

En la misma línea, los argumentos favorables a la posición de la Fiscal invocaron la prevalencia de una interpretación conforme al “objeto y fin” del Estatuto de Roma dada la pretendida existencia de dos interpretaciones posibles respecto al sentido del término “ataque”:

the Court’s adoption of the API Article 49(1) definition of “attack(s)” with respect to other provisions of the Statute need no determine its approach to the specific instance of article 8(2)(e)(iv) [...] When competing interpretations exist, the principle of effectiveness counsels the selection of the one that best fulfills the treaty’s object and purpose, which in this case is to safeguard the international-law protections for [...] cultural property (ICC-01/04-02/06-2594 2020: párrafo 8).

Los argumentos contrarios a la posición de la Fiscal de la CPI insistieron en que no existe fundamento jurídico para pretender atribuir al término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) un sentido distinto al previsto en las normas de DIH: “The term ‘attacks’ [...] in article 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute [...] means what the term ‘attacks’ means in international humanitarian law, namely ‘acts of violence against the adversary, whether in offence or defence [...] It does not relate to destruction of such buildings, monuments, hospitals and places while they are under the control of the destroying party” (ICC-01/04-02/06-2585 2020: párrafo 6). Dichos argumentos abundaron en la contradicción que supondría conferir un sentido distinto al término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) al hacer una lectura del artículo 8 en su conjunto:

Retaining fidelity to the ordinary meaning buttresses the normative integrity of the Rome Statute because ‘intentionally directing attacks’ as used in article 8(2)(e)(iv) mirrors the usage of the same phrase in articles 8(2)(e)(i) to 8(2)(e)(iv), and parallels seven other provisions of article 8(2)(b). These provisions instantiate the principle of distinction, which is the cornerstone of international humanitarian law (ICC-01/04-02/06-2584 2020: párrafo 14).

A la fecha, la Sala de Apelaciones todavía no ha emitido su sentencia en el caso Ntaganda; si bien las sentencias de la CPI no constituyen precedentes vinculantes, cabe destacar que la Sala de Apelaciones señaló que la controversia respecto al sentido del término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) podría tener implicaciones más allá del caso (ICC-01/04-02/06-2554 2020: párrafo 11). En este sentido, el análisis de la idoneidad de la sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia en el caso Al Mahdi se verá enriquecido por las conclusiones a las que arribe la Sala de Apelaciones en el caso Ntaganda.

De momento, la definición de “ataque” en el DIH y el sentido dado al término “ataque” en el artículo 8 del Estatuto de Roma en su conjunto, permiten concluir que la conducta de Al Mahdi no califica como “ataque” en los términos del artículo 8(2)(e)(iv). Si bien la importancia de la protección de los edificios dedicados a la religión y los monumentos históricos es irrefutable, la pretensión de atribuirle al término “ataque” contenido en dicho artículo un sentido distinto no puede derivarse de la misma.

La calificación de un acto de hostilidad como “ataque” depende de la acción emprendida -es decir, de que se trate de un “acto de violencia contra el adversario”, en los términos del artículo 49(1) del PAI-, no del bien afectado por la misma, por lo que pretender que toda afectación a edificios dedicados a la religión y monumentos históricos es un “ataque” en razón de su importancia

supone una excepción que contraría la coherencia y la consistencia de las normas de DIH en la materia.

Esta interpretación se ve reforzada por la referencia hecha en el artículo 8(2)(e)(iv) a que se entiende por crimen de guerra “dirigir intencionalmente ataques” contra los bienes protegidos “a condición de que no sean objetivos militares”. De conformidad con el DIH -PAI, artículo 52(2)-, en lo que respecta a bienes, “los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar”. Dado que en el caso Al Mahdi los bienes destruidos estaban bajo el control de los grupos armados Ansar Dine y AQMI, no había posibilidad de que contribuyeran eficazmente a la acción militar.

Norms that prohibit the destruction of [...] cultural property through demolition [...] by the party in which power it is must be distinguished from the rules that prohibit such destruction by an attack in the conduct of hostilities because, in the former case, such property cannot possibly constitute a military objective for the destroying party. As this party has control, the object can never contribute to its enemy’s military action (Sassoli 2019: 566, párrafo 10.182)

El hecho de que el artículo 8(2)(e)(iv) proteja a los bienes referidos únicamente contra ataques no quiere decir que la destrucción de los mismos una vez que hayan caído en poder del adversario no esté a su vez tipificada como crimen de guerra. El artículo 8(2)(e)(xii) del Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra “Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo”. Si bien puede cuestionarse que el Estatuto de Roma no tipifique de manera específica la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, no

puede alegarse que dicha omisión suponga que la destrucción de los mismos escape a su competencia. En este sentido, la condición de los bienes destruidos podría tenerse en cuenta para la imposición de la pena.

Si bien las reglas generales de interpretación contenidas en el artículo 31(4) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prevén la posibilidad de dar a un término un sentido especial “si consta que tal fue la intención de las partes”, nada hace suponer dicha intención respecto al artículo 8(2)(e)(iv); la opción de adoptar un crimen relativo a la destrucción de ciertos tipos de bienes protegidos -basada en el artículo 56 del Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre- fue descartada en el marco de los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma:

The *travaux préparatoires* indicate that the drafters were familiar with two models or types of provision governing cultural property, one applicable to the conduct of hostilities and the other to persons and property that have fallen under the control of one of the parties. The second of the two, derived from article 56 of the 1907 Hague regulations [...] was actively considered at the initial sessions of the Preparatory Committee [...] However, consensus subsequently emerged around a draft proposed by the United States, where the word ‘attacks’ was employed, that was based on the alternative whose ancestor was article 27 of the Hague Regulations (Schabas, p. 88).

En los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma se señala, respecto al artículo 7 relativo a los crímenes de lesa humanidad, que el elemento “ataque contra una población civil” implica la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 de dicho artículo (asesinato, exterminio, esclavitud, entre otros), enfatizando que “no es necesario que los actos constituyan un ataque militar”.

La atribución de un sentido especial al elemento “ataque contra una población civil” hecha respecto al artículo 7 no se repite respecto al artículo 8(2)(e)(iv), reforzando la interpretación de que las partes no tuvieron la intención de darle un sentido especial al término “ataque” en este último. “It provides confirmation of distinct meanings of the term ‘attack’, depending upon whether article 7 or article 8 is being considered, and also suggests, *a contrario*, that ‘military attack’ is precisely what is contemplated in article 8” (Schabas, p. 81).

De conformidad con el artículo 22(2) del Estatuto de Roma, la definición de un crimen “será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía”. Toda pretendida interpretación sobre el sentido de un elemento de un crimen previsto en el Estatuto de Roma tendría que respetar esta disposición, tal y como sostuvo la jueza Christine Van den Wyngaert en su opinión concurrente a la sentencia de la Sala II de Primera Instancia de la CPI en el caso Ngudjolo: “I attach great importance to Article 22(2) of the Statute, which obliges the Court to interpret the definition of crimes strictly and prohibits any extension by analogy [...] this article overrides the conventional methods of treaty interpretation, as defined in the Vienna Convention on the Law of Treaties, particularly the teleological method” (ICC-01/04-02/12-4 2012: párrafo 18).

Más aún, el artículo 22(2) del Estatuto de Roma dispone que, en caso de ambigüedad, la definición del crimen “será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena”. En consecuencia, pretender que el término “ataque” contenido en el artículo 8(2)(e)(iv) tiene un sentido distinto al previsto en las normas de DIH que lo definen y en el artículo 8 en su

conjunto, a efectos de determinar la responsabilidad penal de Al Mahdi, contraviene los principios de interpretación contenidos en el artículo 22(2):

By including this principle in Part III of the Statute, the drafters wanted to make sure that the Court could not engage in the kind of 'judicial creativity' of which other jurisdictions may at times have been suspected. Moreover, this principle is an essential safeguard to ensure both the necessary predictability and legal certainty that are essential for a system that is based on the rule of law (ICC-01/04-02/12-4 2012: párrafo 18).

Por consiguiente, podemos concluir que pretender que Al Mahdi cometió el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos por su participación en la destrucción de nueve mausoleos y la puerta sagrada de Sidi Yahia en Tombuctú, durante el período en el que los grupos Ansar Dine y AQMI ejercían el control de la ciudad, contraviene la definición del término “ataque” y la distinción entre “ataque” y “destrucción” de bienes culturales establecidas en el DIH, el sentido atribuido al término “ataque” en el artículo 8 del Estatuto de Roma en su conjunto, y los principios de interpretación relativos a la definición de un crimen consagrados en el artículo 22(2) de dicho instrumento.

## CONCLUSIONES

1. En 1988, la ciudad de Tombuctú, Malí, fue listada como Patrimonio Mundial por la UNESCO, incluidas sus tres grandes mezquitas y 16 cementerios y mausoleos.
2. El 17 de enero de 2012 el grupo armado separatista MNLA inició una rebelión contra el gobierno de Malí en la zona norte del país, a la que se plegaron los grupos armados salafistas-yihadistas Ansar Dine, AQMI y MUJAO.
3. Una vez replegadas las Fuerzas Armadas de Malí, el MNLA y los grupos salafistas-yihadistas empezaron a disputarse el control de la zona norte. Ansar Dine y AQMI tomaron el control de Tombuctú el 2 de abril de 2012. El MNLA fue expulsado de la zona norte hacia el 11 de julio de 2012.
4. El ciudadano maliense Al Mahdi se integró a Ansar Dine en abril de 2012 para apoyar sus acciones en Tombuctú, siendo nombrado jefe de la brigada moral “Hesbah”, encargada de reprimir los “vicios manifiestos” según su interpretación del islam. En dicha condición, Al Mahdi organizó y supervisó la destrucción de nueve mausoleos y de la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahia entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012.



5. El 13 de julio de 2012, el gobierno de Malí refirió a la CPI los crímenes más graves cometidos desde enero de 2012 en su territorio, incluida la destrucción de mausoleos y mezquitas. La Fiscal de la CPI inició una investigación sobre la situación en Malí el 16 de enero de 2013.
6. El 18 de septiembre de 2015, la CPI emitió una orden de arresto contra Al Mahdi, quien fue transferido a la CPI el 26 de septiembre de 2015. El 17 de diciembre de 2015, la Fiscal de la CPI acusó a Al Mahdi de haber cometido el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma.
7. El 18 de febrero de 2016, las partes suscribieron un acuerdo de culpabilidad por el cual Al Mahdi aceptó el cargo referido. El 27 de septiembre de 2016, la Sala VIII de Primera Instancia de la CPI declaró a Al Mahdi culpable del cargo referido en la modalidad de coautor y lo condenó a nueve años de prisión.
8. La correcta atribución de responsabilidad a Al Mahdi por la comisión del crimen de guerra de “dirigir intencionalmente ataques” contra los edificios referidos depende de dos circunstancias: que dicha conducta esté vinculada a un CANI y de que constituya un “ataque” de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv).
9. Los CANI son enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El

enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes deben poseer una organización mínima.

10. En cuanto al criterio de organización, Ansar Dine era un grupo armado organizado, con un mando militar identificado y con capacidad de reclutar, equipar y entrenar personal. Ansar Dine planeó y ejecutó operaciones militares en el marco de la rebelión que expulsó a las Fuerzas Armadas de Malí de la zona norte del país y de los enfrentamientos que culminaron con la expulsión del MNLA de dicha zona, ejerciendo el control de Tombuctú hasta su expulsión por las Fuerzas Armadas de Malí con apoyo de fuerzas francesas. A su vez, el MNLA, AQMI y MUJAO eran grupos armados organizados que compartían las características referidas respecto a Ansar Dine y que fueron parte en los mismos enfrentamientos.
11. En cuanto al criterio de intensidad de hostilidades, Ansar Dine llevó a cabo operaciones militares en 7 ciudades del norte de Malí, habiendo enfrentado al MNLA en Kidal, Tombuctú y Ansongo entre el 2 de abril y el 11 de julio de 2012, hasta lograr su expulsión. Posteriormente, enfrentó a las Fuerzas Armadas de Malí, hasta que fue expulsado de Tombuctú en enero de 2013. En sus enfrentamientos recurrió a morteros, granadas y rifles en contra de sus objetivos. El CSNU se refirió a las “violaciones al DIH” en la zona norte de Malí en 3 resoluciones emitidas el año 2012, desplegando una misión de apoyo para la recuperación del país.
12. Al Mahdi fue integrante de Ansar Dine, asumiendo una función continua para el grupo que comprendía su participación directa en las hostilidades. Además de la destrucción de los edificios referidos, Al Mahdi instruyó a

los nuevos reclutas del grupo armado y participó en la lucha contra las Fuerzas Armadas de Malí después de dejar su cargo como jefe de la Hesbah.

13. El CANI en Malí cumplió un papel sustancial en la decisión, la capacidad y el *modus operandi* relativos a la destrucción de los bienes referidos en Tombuctú: la decisión fue tomada por los líderes militares de Ansar Dine y AQMI como parte del objetivo que suscitó su rebelión -es decir, la imposición de la sharia-, la capacidad de Al Mahdi de organizar y ejecutar la destrucción dependía del control que dichos grupos ejercían, y su acceso a los medios y su capacidad de emplearlos también.
14. La Sala VIII de Primera Instancia de la CPI en el caso Al Mahdi señaló que el elemento “dirigir intencionalmente ataques” del artículo 8(2)(e)(iv) abarca todo acto de violencia contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, y que no haría distinción respecto a si el acto se había llevado a cabo en el marco de la conducción de hostilidades o después de que los edificios cayeran bajo el control del grupo armado.
15. Las normas de DIH protegen a los edificios dedicados a la religión y monumentos históricos -con distintas denominaciones- contra “ataques” y “destrucción”. Así, tanto el Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre como el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 consideran infracciones atacar bienes culturales y destruirlos.
16. El PAI y el PAII prohíben cometer “actos de hostilidad” contra los monumentos históricos o los lugares de culto. Los comentarios del CICR

a ambos protocolos precisan que el término “actos de hostilidad” comprende no solo los ataques, sino cualquier acto dirigido contra los bienes protegidos.

17. El PAI define “ataque” como los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos. El comentario del CICR al PAI precisa que el término “ataque” significa “acción de combate”. La jurisprudencia de la CPI ha considerado que la misma definición se aplica al uso del término en el PAI.
18. La CPI ha considerado en reiteradas ocasiones que, de conformidad con las normas de DIH, los crímenes de guerra contenidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma consistentes en “ataques” -incluido el 8(2)(e)(iv)- se cometen contra personas o bienes que no hayan caído bajo el control del adversario, y que para la descripción de actos de violencia ajenos a la acción de combate se emplean otros términos.
19. La Sala VIII de Primera Instancia de la CPI invocó el “estatus especial” de los edificios dedicados a la religión y monumentos históricos protegidos por el artículo 8(2)(e)(iv) para desviarse de la interpretación mayoritaria sobre el sentido del término “ataque” en el caso Al Mahdi.
20. De conformidad con las normas de DIH concernidas y la jurisprudencia mayoritaria de la CPI, la conducta de Al Mahdi no califica como “ataque” por consistir en la destrucción de edificios bajo el control de Ansar Dine, sin que mediaran acciones de combate.

21. La calificación de un acto de hostilidad como un “ataque” depende de la acción emprendida –es decir, de que se trate de un acto de violencia contra el adversario- y no del bien afectado.
22. La conducta del Al Mahdi corresponde al crimen de guerra consistente en destruir bienes de un adversario previsto en el artículo 8(2)(2)(e)(xii) del Estatuto de Roma; si bien este no hace referencia expresa a edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, dicha condición podría haberse tenido en cuenta para la imposición de la pena.
23. Si bien las reglas generales de interpretación contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prevén la posibilidad de dar a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes, los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma revelan que existió un proyecto para tipificar la destrucción de bienes culturales que hayan caído bajo el control de una de las partes, y que fue descartado.
24. El artículo 22(2) del Estatuto de Roma dispone que la definición de un crimen será interpretada estrictamente y que no se hará extensiva por analogía; asimismo, dispone que, en caso de ambigüedad, la definición del crimen será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
25. Al pretender que Al Mahdi cometió el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en Tombuctú mientras la ciudad estaba bajo el control de Ansar Dine, sin que mediaran acciones de combate, la Sala VIII de Primera Instancia

contravino la definición del término “ataque” contenida en el DIH, el sentido atribuido al término en el artículo 8 del Estatuto de Roma y los principios relativos a la interpretación de los crímenes consagrados en el artículo 22(2) del mismo.



## BIBLIOGRAFÍA

BARRAK, Anisa

2017 "Ahmad Al Faqi Al Mahdi: 'Me declaro culpable'". En *UNESCO Courier*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://es.unesco.org/courier/2017-octubre-diciembre/ahmad-al-faqi-al-mahdi-me-declaro-culpable>

BOTHE, Michael, Karl Josef PARTSCH y Waldemar A. SOLF

2013 *New rules for victims of armed conflict. Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949*. Segunda edición. Leiden: Brill-Nijhoff.

BURRUS, Jessica E.

2017 "So far as war allows: Why the Al Mahdi conviction is unlikely to stem the pace of cultural destruction perpetrated by non-state actors". *Washington International Law Journal*. Seattle, volumen 27, número 1, pp. 317-348.

COLE, Daniel M.

2017 "From The Hague to Timbuktu: The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi; a consequential case of firsts for cultural heritage and for the International Criminal Court". *Temple International and Comparative Law Journal*. Philadelphia, volumen 31, número 2, pp. 397-464.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

2008 "¿Cuál es la definición de "conflicto armado" según el derecho internacional humanitario?" En *Comité Internacional de la Cruz Roja*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf>

CURCI, ALICE

2019 "The Prosecutor v. Al Mahdi and the destruction of cultural heritage: Property crime or crime against humanity". *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*. Los Angeles, volumen 23, número 1, pp. 159-182.

DROEGE, Cordula

2012 “Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians”. *International Review of the Red Cross*. Ginebra, volumen 94, número 886, pp. 533-578.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

2016 “Preguntas y respuestas: el caso de Al Mahdi ante la CPI”. En *FIDH*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://www.fidh.org/es/region/africa/mali/preguntas-y-respuestas-el-caso-de-al-mahdi-ante-la-cpi>

GOTTLIEB, Yaron

2020 “Attacks against cultural heritage as a crime against humanity”. *Case Western Reserve Journal of International Law*. Cleveland, volumen 52, número 1, pp. 287-330.

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

*The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*

2016 *ICC-01/12-01/15-171*. Judgment and Sentence: 27 de septiembre de 2016.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016\\_07244.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF)

2016 *ICC-01/12-01/15-78-Anx1*. Document commun à l'Accusation et à la Défense présentant les bases factuelles soutenant l'aveu de culpabilité de Monsieur Ahmad AL FAQI AL MAHDI : 18 de febrero de 2016.

[https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016\\_05666.PDF](https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05666.PDF)

2015 *ICC-01/12-01/15-70-AnxA-Corr*. Charge brought by the Prosecution against Ahmad AL FAQI AL MAHDI: 17 de diciembre de 2015.

[https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016\\_01827.PDF](https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_01827.PDF)

2013 *Situation in Mali*. Article 53(1) Report: 16 de enero de 2013.

[https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/SASMaliArticle53\\_1PublicReportENG16Jan2013.pdf](https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/SASMaliArticle53_1PublicReportENG16Jan2013.pdf)

*The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*

2020 *ICC-01/04-02/06-2594*. Amicus Curiae Observations by Public International Law & Policy Group: 18 de septiembre de 2020.



[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_05325.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_05325.PDF)

2020 *ICC-01/04-02/06-2588*. Amicus Curiae Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence on Behalf of the Antiquities Coalition, Blue Shield International and Genocide Watch: 18 de septiembre de 2020.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_05311.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_05311.PDF)

2020 *ICC-01/04-02/06-2589*. Submission of Observations to the Appeals Chamber Pursuant to Rule 103: 18 de septiembre de 2020.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_05312.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_05312.PDF)

2020 *ICC-01/04-02/06-2585*. Observations by professor Roger O'Keefe, pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, on the merits of the legal questions presented in 'Order inviting expressions of interest as amici curiae in judicial proceedings (pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence)' of 24 July 2020 (ICC-01/04-02/06-2554): 17 de septiembre de 2020.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_05305.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_05305.PDF)

2020 *ICC-01/04-02/06-2584*. Observations of Professor Michael A. Newton on the merits of the legal questions presented by the Appeals Chamber in the Case of The Prosecutor v. Bosco Ntaganda: 17 de septiembre de 2020.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_05300.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_05300.PDF)

2020 *ICC-01/04-02/06-2554*. Order inviting expressions of interest as amici curiae in judicial proceedings (pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence): 24 de julio de 2020.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020\\_04636.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_04636.PDF)

2019 *ICC-01/04-02/06-2449*. Defence Response to Prosecution Appeal Brief, 7 October 2019 (ICC-01/04-02/06-2432): 9 de diciembre de 2019.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019\\_07376.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_07376.PDF)

2019 *ICC-01/04-02/06-2432*. Prosecution Appeal Brief: 7 de octubre de 2019.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019\\_05927.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_05927.PDF)

2019 *ICC-01/04/-02/06-2359*. Judgment: 8 de julio de 2019

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019\\_03568.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF)

2014 *ICC-01/04-01/06-309*. Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda: 9 de junio de 2014.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014\\_04750.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_04750.PDF)

2014 *ICC-01/04-02/06-203-AnxA*. Annex A: Prosecution's submission of document containing the charges and the list of evidence: 10 de enero de 2014.

[https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2014\\_00587.PDF](https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2014_00587.PDF)

*The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*

2008 *ICC-01/04-01/07-717*. Decision on the confirmation of charges: 30 de septiembre de 2008.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008\\_05172.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_05172.PDF)

*The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui*

2012 *ICC-01/04-02/12-4*. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute. Concurring Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert: 18 de diciembre de 2012.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012\\_10250.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_10250.PDF)

*The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*

2012 *ICC-01/04-01/06-2842*. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute: 14 de marzo de 2012.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012\\_03942.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF)

2007 *ICC-01/04-01/06-803-tEN*. Decision on the confirmation of charges: 29 de enero de 2007.

[https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007\\_02360.PDF](https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02360.PDF)

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

*Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a "Dule"*

APPEALS CHAMBER

1995 *IT-94-1*. Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction: 2 de octubre de 1995.

<https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>

*Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj*

TRIAL CHAMBER I

2008 *IT-04-84-T*. Judgement: 3 de abril de 2008.

<https://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/080403.pdf>

INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS

2015 “Mali: The hearing of Al Mahdi before the ICC is a victory, but charges must be expanded”. En *FIDH*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/mali-the-hearing-of-abou-tourab-before-the-icc-is-a-victory-but>

JUNOD, Sylvie-Stoyanka y otros

1998 *Comentarios del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios*. Traducción de José Chocomeli Lera. Bogotá, CICR, Plaza & Janés.

MATFESS, Hilary

2019 “Democracy Delayed: Parliamentary Elections and Insecurity in Mali”. En *ACLEDD*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://acleddata.com/2019/06/06/democracy-delayed-parliamentary-elections-and-insecurity-in-mali/>

MELZER, Nils

2015 *Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario*. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja.

OUEDRAOGO, Emile

2017 “Le process Al Mahdi: Un pas de geant pour la Cour Penale Internationale”. *Revue Quebecoise de Droit Internationale*. Montreal, volumen 2017, edición especial, pp. 101-124.

ROETMAN, Tim Jan, Marie MIGEON y Véronique DUDOUE

2019 “Salafi jihadi armed groups and conflict (de-escalation): The case of Ansar Dine in Mali. Case Study Report” En *Berghof Foundation*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

[https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/user\\_upload/2019\\_SJAG\\_CaseStudy\\_AnsarDine.pdf](https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/user_upload/2019_SJAG_CaseStudy_AnsarDine.pdf)

SANDOZ, Yves y otros

2000 *Comentario del Protocolo del 8 de julio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*. Traducción de Mauricio Duque Ortiz. Dos Tomos. Bogotá: CICR, Plaza & Janés.

SASSOLI, Marco

2019 *International Humanitarian Law. Rules, Controversies and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Gloucestershire, Edward Elgar.

SCHABAS, William

2017 “Al Mahdi has been convicted of a crime he did not commit”. *Case Western Reserve Journal of International Law*, Cleveland, volumen 49, número 1, pp. 75-102.

STANFORD UNIVERSITY

2018 *Mapping Militant Organizations. “Ansar Dine.”*. En *Stanford University*. Consulta: 15 de septiembre 2020.

<https://stanford.app.box.com/s/s2n0hzyd6sftuk7w3jizphnotgx5mgmx>

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

2012 “Heritage sites in northern Mali placed on List of World Heritage in Danger”. En *UNESCO*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<https://whc.unesco.org/en/news/893>

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

2012a *Resolution 2082 (2012)*. Consulta: 15 de septiembre 2020.

<http://unscr.com/files/2012/02082.pdf>

2012b *Resolution 2071 (2012)*. Consulta: 15 de septiembre 2020.

<http://unscr.com/files/2012/02071.pdf>

2012c *Resolution 2056 (2012)*. Consulta: 15 de septiembre de 2020.

<http://unscr.com/files/2012/02056.pdf>

**Cour  
Pénale  
Internationale**



**International  
Criminal  
Court**

Original: English

No.: ICC-01/12-01/15  
Date: 27 September 2016

**TRIAL CHAMBER VIII**

**Before:** Judge Raul C. Pangalangan, Presiding Judge  
Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua  
Judge Bertram Schmitt

**SITUATION IN THE REPUBLIC OF MALI**

**IN THE CASE OF *THE PROSECUTOR v. AHMAD AL FAQI AL MAHDI***

**Public**

**Judgment and Sentence**

To be notified in accordance with Regulation 31 of the Regulations of the Court to:

**Office of the Prosecutor**

Ms Fatou Bensouda  
Mr James Stewart  
Mr Gilles Dutertre

**Counsel for the Defence**

Mr Mohamed Aouini  
Mr Jean-Louis Gilissen

**Legal Representatives of Victims**

Mr Mayombo Kassongo

**Legal Representatives of Applicants**

**Unrepresented Victims**

**Unrepresented Applicants for  
Participation/Reparation**

**Office of Public Counsel for  
Victims**

Ms Paolina Massidda

**Office of Public Counsel for the Defence**

**States' Representatives**

**Amicus Curiae**

**REGISTRY**

---

**Registrar**

Mr Herman von Hebel

**Counsel Support Section**

**Victims and Witnesses Unit**

Mr Nigel Verill

**Detention Section**

Mr Patrick Craig

**Victims Participation and Reparations  
Section**

Ms Isabelle Guibal

**Others**

<b>I. Introduction</b> .....	4
<b>A. Procedural history</b> .....	4
<b>B. The Accused and the charge</b> .....	6
<b>II. Judgment</b> .....	7
<b>A. Applicable law</b> .....	7
1. <i>Crime charged</i> .....	7
2. <i>Modes of liability</i> .....	11
3. <i>Article 65 of the Statute</i> .....	11
<b>B. Established facts of the case</b> .....	15
1. <i>Context</i> .....	16
2. <i>Decision to attack the mausoleums and mosques</i> .....	18
3. <i>The attack and Mr Al Mahdi's responsibility</i> .....	20
<b>C. Findings</b> .....	25
1. <i>Findings on Article 8(2)(e)(iv) of the Statute</i> .....	26
2. <i>Findings on Article 25(3)(a) of the Statute (co-perpetration) and other modes of liability</i> .....	28
<b>D. Conclusion</b> .....	31
<b>III. Sentence</b> .....	32
<b>A. Applicable law</b> .....	32
1. <i>Gravity of the crime</i> .....	35
2. <i>Aggravating and mitigating circumstances</i> .....	35
<b>B. Analysis</b> .....	36
1. <i>Gravity of the crime</i> .....	36
2. <i>Mr Al Mahdi's culpable conduct</i> .....	39
3. <i>Mr Al Mahdi's individual circumstances</i> .....	42
<b>C. Determination of the sentence</b> .....	46

**TRIAL CHAMBER VIII** ('Chamber') of the International Criminal Court ('Court' or 'ICC') issues the following Judgment and Sentence, in the case of *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, having regard to Articles 8(2)(e)(iv), 23, 25(3)(a), 65 and 76 to 78 of the Rome Statute ('Statute') and Rules 139 and 145 of the Rules of Procedure and Evidence ('Rules').

## **I. Introduction**

### **A. Procedural history**

1. On 18 September 2015, the Single Judge of Pre-Trial Chamber I issued a warrant for Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi's arrest.<sup>1</sup> Mr Al Mahdi was transferred to The Hague on 26 September 2015 and his first appearance took place on 30 September 2015.<sup>2</sup>
2. On 17 December 2015, the Office of the Prosecutor ('Prosecution') filed its document containing the charge. It contained a single charge alleging that Mr Al Mahdi is responsible for the war crime of attacking protected objects under Article 8(2)(e)(iv) of the Statute.<sup>3</sup>
3. On 18 February 2016, the parties reached a plea agreement in relation to the charge ('Agreement').<sup>4</sup>
4. On 24 March 2016, the Pre-Trial Chamber confirmed the charge alleged by the Prosecution.<sup>5</sup> Trial Chamber VIII was constituted accordingly on 2 May 2016.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> *Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI*, [ICC-01/12-01/15-1-Red](#) (public redacted version notified on 28 September 2015).

<sup>2</sup> Transcript of Hearing, [ICC-01/12-01/15-T-1-ENG](#).

<sup>3</sup> *Chef d'accusation retenu par l'Accusation contre Ahmad AL FAQI AL MAHDI*, 17 December 2015, [ICC-01/12-01/15-62](#).

<sup>4</sup> Annex 1 to the *Version publique expurgée du «Dépôt de l'Accord sur l'aveu de culpabilité de M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi»*, 25 février 2016, *ICC-01/12-01/15-78-Conf-Exp*, 25 February 2016, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#) (confidential English translation notified on 21 June 2016, public redacted version notified on 19 August 2016 and public redacted English translation notified on 9 September 2016).



5. On 24 May 2016, this Chamber held its first status conference.<sup>7</sup> At this status conference, it was decided, with the agreement of the parties, that: (i) in the event of a conviction, the judgment and sentence in this case would be rendered simultaneously; and (ii) the materials on the confirmation phase lists of evidence were considered as presented by the Prosecution and accepted by the Accused for the purposes of an Article 65 determination. After receiving supplementary lists of further materials presented by the Prosecution and accepted by the Accused, the Chamber has before it 714 items to consider in its determinations<sup>8</sup> and two written witness statements of Defence witnesses to be considered exclusively for sentencing.<sup>9</sup>
6. On 8 June 2016, the Chamber appointed a Legal Representative of Victims ('LRV') in the case.<sup>10</sup> In total, eight victims participated in the trial proceedings.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Public redacted version of the 'Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi', [ICC-01/12-01/15-84-Red](#) (with [separate opinion](#)).

<sup>6</sup> Presidency, Decision constituting Trial Chambers VIII and IX and referring to them the cases of *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi* and *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, [ICC-01/12-01/15-86](#).

<sup>7</sup> Transcript of Hearing, ICC-01/12-01/15-T-3-CONF-ENG.

<sup>8</sup> Consolidated and Updated Joint List of Evidence, 7 September 2016, ICC-01/12-01/15-167 (with annex). See also Annex A to the *Dépôt de l'inventaire des preuves que l'Accusation entend produire à l'audience de confirmation des charges*, 18 December 2015, ICC-01/12-01/15-67-Conf-Exp-AnxA; Annex A to the *Addendum au « Dépôt de l'inventaire des preuves que l'Accusation entend produire à l'audience de confirmation des charges », 18 décembre 2015 (ICC-01/12-01/15-67)*, 29 January 2016, ICC-01/12-01/15-74-Conf-Exp-AnxA; Annex A to the *Communication de la liste conjointe d'éléments de preuve additionnels soumise en application de l'article 65(1)(c)(ii) du Statut et demande d'extension de temps pour déposer 5 notes d'enquêteurs*, 1 July 2016, ICC-01/12-01/15-119-Conf-AnxA; Annex A to the *Addendum à la « Communication de la liste conjointe d'éléments de preuve additionnels soumise en application de l'article 65(1)(c)(ii) du Statut et demande d'extension de temps pour déposer 5 notes d'enquêteurs », 1 juillet 2016, ICC-01/12-01/15-119-Conf*, 15 July 2016, ICC-01/12-01/15-130-Conf-AnxA.

<sup>9</sup> Transcripts of hearing, 22 August 2016, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 3, line 20, to p. 4, line 15, [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#), p. 44, lines 13-18; *Requête urgente de la Défense aux fins de dépôt de déclarations écrites de deux témoins au dossier du procès, avec deux annexes confidentielles 1 et 2*, 23 August 2016, ICC-01/12-01/15-162-Conf (with two annexes containing the witness statements MLI-DEF-0001-0001 and MLI-DEF-0002-0001).

<sup>10</sup> Public redacted version of 'Decision on Victim Participation at Trial and on Common Legal Representation of Victims', [ICC-01/12-01/15-97-Red](#) (*ex parte* version notified on the same day).

<sup>11</sup> [ICC-01/12-01/15-97-Red](#), p. 15; Public redacted version of 'Second Decision on Victim Participation at Trial', 12 August 2016, 12 August 2016, [ICC-01/12-01/15-156-Red](#) (confidential version notified on the same day). Following decision ICC-01/12-01/15-156-Red, victim a/35008/16 withdrew. Transcript of Hearing, 22 August 2016, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 3, lines 8-19.

7. The trial was held between 22 and 24 August 2016.<sup>12</sup> Mr Al Mahdi made an admission of guilt. All oral submissions relating to the judgment and sentencing were received,<sup>13</sup> and the Prosecution presented the testimony of three witnesses.
8. Excluding the present decision, this Chamber rendered 18 written decisions, 12 oral decisions and 37 e-mail decisions in the course of the trial proceedings.

### **B. The Accused and the charge**

9. Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi, also known as Abu Turab, was born in Agoune in the region of Timbuktu, Mali. He is between 30 and 40 years old<sup>14</sup> and belongs to a family recognised in his community for having a particularly high knowledge of Islam.<sup>15</sup> Having received Koranic education since his childhood,<sup>16</sup> Mr Al Mahdi has a thorough knowledge of the Koran<sup>17</sup> and gave lectures as an expert on religious matters.<sup>18</sup> He joined the armed group known as Ansar Dine in April 2012.<sup>19</sup>
10. Mr Al Mahdi is charged with intentionally directing attacks against 10 buildings of a religious and historical character in Timbuktu, Mali, between

<sup>12</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#). For more on the conduct of the present proceedings, see the Directions on the Conduct of the Proceedings, 22 July 2016, [ICC-01/12-01/15-136](#) (with [annex](#)).

<sup>13</sup> The participants also made written sentencing submissions. *Observations de la Défense sur les principes devant gouverner la peine et les circonstances aggravantes et/ou atténuantes en la cause, en conformité avec l'ordonnance ICC-01/12-01/15-99 de la Chambre (ICC-01/12-01/15-141-Conf)*, 22 July 2016, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#) (corrigendum and public redacted version notified 20 September 2016) ('Defence Sentencing Observations'); the Prosecution's submissions on sentencing, 22 July 2016, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#) (with annex; public redacted version notified on 22 August 2016) ('Prosecution Sentencing Observations'); *Observations des victimes tendant à la fixation d'une peine exemplaire pour crimes de guerre*, 22 July 2016, ICC-01/12-01/15-135-Conf ('LRV Sentencing Observations'). See also The Registry's Observations on Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi's Solvency and Conduct while in Detention, 21 July 2016, ICC-01/12-01/15-134-Conf ('Registry Observations').

<sup>14</sup> First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 3 (fact 10).

<sup>15</sup> Defence witness statement, MLI-DEF-0001-0001, 0002.

<sup>16</sup> Statement by Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4511, 4516-18.

<sup>17</sup> First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 3 (fact 11).

<sup>18</sup> Statement by Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4511, 4523-25; Defence witness statement, MLI-DEF-0002-0001, 0001-02.

<sup>19</sup> First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, pp. 2 and 3 (facts 3-13).

around 30 June 2012 and 11 July 2012: (i) the Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit Mausoleum; (ii) the Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum; (iii) the Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti Mausoleum; (iv) the Alpha Moya Mausoleum; (v) the Sheikh Mouhamad El Mikki Mausoleum; (vi) the Sheikh Abdoul Kassim Attouaty Mausoleum; (vii) the Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi Mausoleum; (viii) the Sidi Yahia Mosque door and the two mausoleums adjoining the Djingareyber Mosque, namely (ix) the Ahmed Fulane Mausoleum and (x) the Bahaber Babadié Mausoleum.

## II. Judgment

### A. Applicable law

#### 1. *Crime charged*

11. The only confirmed charge in this case is the war crime of attacking protected objects under Article 8(2)(e)(iv) of the Statute, which punishes the following act: 'Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives.' The parties jointly submit that this is the proper characterisation of the crime committed in this case. Accordingly, this is the crime with which the Prosecution has charged the defendant and to which the defendant has admitted guilt.
12. The Chamber notes that the Prosecution did not charge the defendant with the more general crime of destruction of civilian property under Article 8(2)(e)(xii), which punishes the following acts: 'Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict.' No arguments have been raised that Article

8(2)(e)(xii) would have been a more appropriate charge and the Chamber sees no reason to consider any legal recharacterisation,<sup>20</sup> noting in particular that the specific intent of the defendant to attack protected objects meets squarely the *mens rea* requirement of Article 8(2)(e)(iv).

13. In order to prove the crime charged, it must be proven that:

1. The perpetrator directed an attack.
2. The object of the attack was one or more buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals or places where the sick and wounded are collected, which were not military objectives.
3. The perpetrator intended such building or buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals or places where the sick and wounded are collected, which were not military objectives, to be the object of the attack.
4. The conduct took place in the context of and was associated with an armed conflict not of an international character.
5. The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict.<sup>21</sup>

Considering that this is the first case in which the Court is applying Article 8(2)(e)(iv), the Chamber will proceed to interpret this crime and its elements.

14. The special protection of cultural property in international law can be traced back to Articles 27 and 56 of the 1907 Hague Regulations<sup>22</sup> and to the 1919 Commission on Responsibility, which identified ‘wanton destruction of

<sup>20</sup> See, generally, Regulation 55 of the Regulations (‘Authority of the Chamber to modify the legal characterisation of facts’).

<sup>21</sup> Elements of Crimes, Article 8(2)(e)(iv).

<sup>22</sup> [Convention \(IV\) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague](#), 18 October 1907, Articles 27 and 56 (Article 27 provides: ‘In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes’). For an even earlier national codification of this prohibition, see also [Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field \(Lieber Code\)](#), 1863, Articles 35 and 36.

religious, charitable, educational, and historic buildings and monuments’ as a war crime.<sup>23</sup> The Geneva Conventions also recognised the need for special protection of objects – like hospitals – which are already protected as civilian objects.<sup>24</sup> Subsequent international instruments reflect the enhanced protection of cultural property, including Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions<sup>25</sup> and the Second Protocol to the Hague Convention of 1954.<sup>26</sup>

15. The Chamber considers that the element of ‘direct[ing] an attack’ encompasses any acts of violence against protected objects and will not make a distinction as to whether it was carried out in the conduct of hostilities or after the object had fallen under the control of an armed group. The Statute makes no such distinction. This reflects the special status of religious, cultural, historical and similar objects, and the Chamber should not change this status by making distinctions not found in the language of the Statute. Indeed, international humanitarian law protects cultural objects as such from crimes committed both in battle and out of it.<sup>27</sup>
16. Moreover, existing case-law from other cases pertaining to attacks against civilian populations<sup>28</sup> does not offer guidance. The Statute protects persons and

<sup>23</sup> Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, [14 The American Journal of International Law 95](#) (No. 1-2, 1920), p.115.

<sup>24</sup> [Convention \(I\) for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field](#), 12 August 1949, Articles 19-23; [Convention \(II\) for the amelioration of the condition of wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea](#), 12 August 1949, Articles 22, 23, 34-35; [Convention \(IV\) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War](#), 12 August 1949, Articles 14, 18 and 19.

<sup>25</sup> [Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts \(Protocol I\)](#), 8 June 1977, Article 53; [Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts \(Protocol II\)](#), 8 June 1977, Article 16. Both these protocols make reference to an earlier 1954 Hague Convention. See [Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention](#), The Hague, 14 May 1954, Article 4.

<sup>26</sup> [Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague](#), 26 March 1999, Article 15.

<sup>27</sup> See para. 14 of the present Judgment.

<sup>28</sup> See, generally, Pre-Trial Chamber II, *The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, 9 June 2014, [ICC-01/04-02/06-309](#), para. 45; Pre-Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, [ICC-01/04-01/07-717](#) (notified on 1 October 2008), para. 267.

cultural objects differently. Persons are protected by many distinct clauses that apply during hostilities, after an armed group has taken control, and against various and specific kinds of harm. However, cultural objects in non-international armed conflicts are protected as such, not generically as civilian objects, only in Article 8(2)(e)(iv), which makes no distinction between attacks made in the conduct of hostilities or afterwards. Lastly, the jurisprudence of the ICTY is of limited guidance given that, in contrast to the Statute, its applicable law does not govern ‘attacks’ against cultural objects but rather punishes their ‘destruction or wilful damage’.<sup>29</sup> The legal contexts thus differ.

17. Article 8(2)(e)(iv) is the non-international armed conflict analogue of Article 8(2)(b)(ix), applicable in international armed conflict and with nearly identical elements.<sup>30</sup> Both provisions govern the directing of attacks against special kinds of civilian objects, reflecting the particular importance of international cultural heritage. Article 8(2)(e) sets forth a contextual component, namely that it applies to armed conflicts not of an international character that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organised armed groups.
18. The parties submit jointly, and the Chamber has received evidence, that there was an armed conflict not of an international character in Mali during the relevant period. The Chamber notes that one element of the crime is that the ‘conduct took place in the context of and was associated with an armed conflict not of an international character.’ The Chamber understands that the ‘conduct’ is the attack on cultural objects, and what this element requires is not a link to

<sup>29</sup> Compare also Article 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute with Article 3(d) of the [ICTY Statute](#) (criminalising ‘seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science’); ICTY, Trial Chamber II, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, Judgement, 31 January 2005, [IT-01-42-T](#) (‘*Strugar* TJ’), para. 308 (interpreting the ICTY Statute as requiring actual damage or destruction to the cultural property).

<sup>30</sup> The only difference is the nature of the armed conflict in the contextual elements.

any particular hostilities but only an association with the non-international armed conflict more generally.

## 2. *Modes of liability*

19. In order to prove that someone co-perpetrated a crime by committing it jointly with others under Article 25(3)(a) of the Statute, it must be proven that:
1. The person makes an essential contribution<sup>31</sup> with the resulting power to frustrate the commission of the crime.<sup>32</sup>
  2. The person's contribution is made within the framework of an agreement with others which led to the commission of the crime.<sup>33</sup>
  3. The person satisfies the subjective elements of the crime.<sup>34</sup>
20. For the reasons set out later in this Judgment,<sup>35</sup> it is unnecessary to set out the requirements for the alternative modes of liability charged by the Prosecution and confirmed by the Pre-Trial Chamber.

## 3. *Article 65 of the Statute*

21. As this is the first time Article 65 has been applied at this Court, the Chamber will briefly address the origins and purpose of this provision.
22. The 1994 International Law Commission Draft Statute required the Trial Chamber to allow the accused to 'enter a plea of guilty or not guilty'.<sup>36</sup> This provision soon met with controversy. It was noted in the 1995 Ad Hoc

<sup>31</sup> There is a split in this Court's case-law as to whether this contribution must be to the 'crime' itself or the 'common plan'. However, on the facts of the present case this distinction makes no difference.

<sup>32</sup> Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Public redacted Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 1 December 2014, [ICC-01/04-01/06-3121-Red](#), A5, paras. 469 and 473 ('Lubanga AJ').

<sup>33</sup> Lubanga AJ, [ICC-01/04-01/06-3121-Red](#), paras. 445 and 446.

<sup>34</sup> See Lubanga AJ, [ICC-01/04-01/06-3121-Red](#), paras. 447-451; Lubanga TJ, [ICC-01/04-01/06-2842](#), paras. 1014-18.

<sup>35</sup> See paras. 57 and 58 of the present Judgment.

<sup>36</sup> Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May to 22 July 1994, Official Records of the General Assembly, Forty-ninth session, Supplement No. 10, [A/49/10, part II](#), pp. 54 and 55.

Committee report that a view had been expressed by some delegations that ‘the effect of a guilty plea would need to be spelled out in view of the differences between civil-law and common-law systems’ and the remark was made that, ‘in view of the gravity of the crimes within the jurisdiction of the court, it would be inappropriate to permit plea bargaining’.<sup>37</sup> It was also noted on this issue in the 1996 Preparatory Committee report that ‘[a]ttention was drawn to the need to bridge the gap between different legal systems [...] with emphasis being placed on finding the common denominators in different legal systems’.<sup>38</sup>

23. Civil and common law systems diverge, traditionally speaking, on the role played by admissions of guilt. This reflects deeper traditional differences in understanding on the nature of criminal procedure:

If proceedings are patterned upon the model of an official determination of the facts of the case, both formal pleadings and stipulations are objectionable [...] On the other hand, if proceedings are essentially a contest, and the judgment a decision between the contestants, the logic of this procedural design naturally tends toward accepting formal pleadings and stipulations.<sup>39</sup>

24. The first language of what ultimately became Article 65(1)-(4) of the Statute comes from an Argentine working paper distributed in 1996.<sup>40</sup> This proposal intended to serve as an intermediate solution that blended traditional common and civil law concepts.<sup>41</sup> A joint Argentine-Canadian follow-up proposal first

<sup>37</sup> Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court, 6 September 1995, [A/50/22 Supp. 22](#), para. 170.

<sup>38</sup> Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Proceedings of the Preparatory Committee during March-April and August 1996, [A/51/22 Supp. 22](#) (‘1996 PrepCom Report’), [vol. I](#), para. 263.

<sup>39</sup> Mirjan Damaška, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study, *121 University of Pennsylvania Law Review* 506, p. 582 (1972-73). Commentators have noted that this traditional distinction has substantially eroded in recent times. Fabricio Guariglia and Gudrun Hochmayr, Proceedings on an admission of guilt, in *Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary*, 2016 (C.H. Beck – Hart – Nomos, 3<sup>rd</sup> edition, Triffterer and Ambos, eds) (‘Triffterer Commentary’), p. 1623.

<sup>40</sup> Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Working paper submitted by Argentina, 13 August 1996, [A/AC.249/L.6](#), pp. 8, 14 and 15.

<sup>41</sup> [A/AC.249/L.6](#), p. 8.



introduced the language of an ‘admission of guilt’, avoiding the familiar terminology used in either the civil or common law traditions.<sup>42</sup>

25. The biggest change in the provision following these 1996 proposals is the introduction of what was to become Article 65(5) of the Statute.<sup>43</sup> This was adopted to ease the concerns of those delegations which wanted to ensure that the admission of guilt procedures did not open the way to the introduction of plea bargaining.<sup>44</sup> This is a different issue to that of ‘guilty pleas’ generally, as it is possible to have an admission of guilt in the absence of any agreement between the parties.<sup>45</sup> Article 65(5) explicitly makes such *inter-partes* discussions non-binding on the Trial Chamber, a notion acceptable to plea bargaining advocates and sceptics alike.<sup>46</sup>
26. Few substantive changes were made to this draft from the 1997 Preparatory Committee onwards, and Article 65 was adopted together with the remainder of the Statute on 17 July 1998.

<sup>42</sup> Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, proposal submitted by Argentina and Canada for Articles 38, 38 *bis*, 41 and 43, 20 August 1996, [A/AC.249/WP.16](#), reproduced in [1996 PrepCom Report, vol. II](#), pp. 173 and 174. See also Hans-Jörg Behrens, *The Trial Proceedings*, in *The International Criminal Court – The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results*, 1998 (Kluwer Law International, Roy S. Lee ed.) (‘Lee Statute Commentary’), p. 242. This said, while the English version of Article 64(8)(a) of the final Statute uses the term ‘admission of guilt’, the French version speaks of ‘*la possibilité de plaider coupable* [...]’. Article 65 in the French version of the final Statute uses the term ‘*aveu de culpabilité*’ throughout.

<sup>43</sup> This provision appears as early as 14 August 1997, in a Preparatory Committee Report. Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, *Decisions Taken by the Preparatory Committee at its Session Held from 4 to 15 August 1997*, 14 August 1997, [A/AC.249/1997/L.8/Rev.1](#), p. 33. A comment on the draft paragraph appears in footnote 41, which reads: ‘Concerns were expressed about this paragraph and it was suggested that its formulation should continue to be examined’.

<sup>44</sup> Triffterer Commentary, page 1633; Lee Commentary, p. 242; William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2010 (Oxford University Press) (‘Schabas Commentary’), p. 780.

<sup>45</sup> *Black’s Law Dictionary* confirms that a plea is not necessarily always linked with a plea bargain: ‘[...] [a] guilty plea is usu[ally] part of a plea bargain’. ‘Plea’, in *Black’s Law Dictionary* (10<sup>th</sup> ed., 2014).

<sup>46</sup> See Schabas Commentary, pp. 776-77; Procedure before the Trial Chamber, in *The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary*, 2002 (Oxford University Press, Cassese, Gaeta and Jones, eds.), vol. II, p. 1290 (‘[i]t is, moreover, a fairly generally accepted principle that bargaining between the prosecution and defence must, in those States that use it, be approved by a judge’).

27. The solution reflected in the final Article 65 of the Statute follows a 'third avenue' between the traditional common law and civil law approaches.<sup>47</sup> Pursuant to Articles 64(8)(a) and 65 of the Statute, an accused is afforded an opportunity to make an admission of guilt at the commencement of the trial, a procedure which looks not dissimilar to the traditional common law 'guilty plea'. Article 65(5) of the Statute also implicitly authorises discussions corresponding to plea agreements in common law legal systems. However, Article 65 also requires the Chamber to conclude that the admission is 'supported by the facts of the case', specifically requiring it to consider both the admission of guilt 'together with any additional evidence presented'.<sup>48</sup> This is more analogous to a summary or abbreviated procedure traditionally associated with civil law systems.
28. Such admissions, when accepted by the Chamber, can have a multitude of benefits to the Court and the interests of justice more generally. An admission of guilt can lead to a swifter resolution of a case, giving much needed finality in an otherwise unmatchable timeframe. While there may be victims who prefer to testify, others may wish to be spared the stress of having to testify to their personal tragedies and being exposed to cross-examination. Accused admitting guilt pursuant to an agreement to testify in subsequent trials can contribute to the search for the truth as insider witnesses in cases against others. Perhaps most importantly, the speed at which cases can be resolved following admissions of guilt saves the Court both time and resources, which can be otherwise spent advancing the course of international justice on other fronts.

---

<sup>47</sup> Triffterer Commentary, p. 1625.

<sup>48</sup> Article 65(1)(c) and (2) of the Statute.

## B. Established facts of the case

29. The Chamber will now proceed to set out what it considers to be the established facts of the case. The Chamber must make such a determination pursuant to Article 65(1)(c) of the Statute. In order to assess whether ‘the admission of guilt is supported by the facts of the case’, the Chamber heard three witnesses and considered the hundreds of documentary evidence items presented by the Prosecution and accepted by the Accused. For each of the established facts, the Chamber has relied upon: (i) the admissions of the Accused;<sup>49</sup> (ii) the supplementary material presented by the Prosecution and accepted by the Accused;<sup>50</sup> and (iii) the testimony of the witnesses who appeared before this Chamber. Although there is no corroboration requirement when assessing evidence,<sup>51</sup> the Chamber paid particular attention to whether evidence could establish the facts independently of the Accused’s admissions.
30. The Chamber notes at the outset that Mr Al Mahdi has confirmed, both orally and in writing, that he:
- (i) Understands the nature of the charge against him, and the consequences of an admission of guilt;<sup>52</sup>
  - (ii) Makes an admission of guilt voluntarily, after sufficient consultation with Defence counsel;<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#). See also First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA.

<sup>50</sup> ICC-01/12-01/15-67-Conf-AnxA; ICC-01/12-01/15-74-Conf-AnxA. See also Transcript of Hearing, 24 May 2016, ICC-01/12-01/15-T-3-Conf-ENG, p. 21, line 13, to p. 22, line 14 (confirming that the materials listed in ICC-01/12-01/15-67-Conf-AnxA and ICC-01/12-01/15-74-Conf-AnxA are accepted by the accused).

<sup>51</sup> Rule 63(4) of the Rules.

<sup>52</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 28; Transcript of Hearing, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 11, lines 10-20.

<sup>53</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 6, 23, 28; Transcript of Hearing, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 10, lines 7-11 and 18-21.

- (iii) Waives his rights to: (a) plead not guilty and require the Prosecution to prove the charges beyond reasonable doubt at a full trial; (b) not confess guilt and to remain silent; (c) raise defences and grounds for excluding criminal responsibility, and to present admissible evidence at a full trial; (d) examine the witnesses against him and to obtain the examination of witnesses on his behalf at a full trial; and (e) appeal a conviction or sentence, provided the sentence is not in excess of the recommended sentencing range;<sup>54</sup> and
- (iv) Accepts his individual criminal responsibility for the charge, including all modes of liability alleged;<sup>55</sup> it is noted that the Agreement does not envisage the modification of the charge.

#### 1. Context

31. In January 2012, armed violence took place in the territory of Mali and led to different armed groups taking control of the north of the country.<sup>56</sup> Around early April 2012, following the retreat of Malian armed forces, the groups Ansar Dine and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb ('AQIM') took control of Timbuktu.<sup>57</sup> From then until January 2013 Ansar Dine and AQIM imposed their

<sup>54</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 21; Transcript of Hearing, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 11, lines 3-7.

<sup>55</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 4; Transcript of Hearing, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 6, line 18, to p. 7, line 19.

<sup>56</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 1; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0304, 0310; Malian Intelligence bulletin, MLI-OTP-0012-0098; Malian Government's Memorandum on the security situation in the regions of northern Mali, MLI-OTP-0001-0167; Malian Intelligence bulletin on the situation of armed groups in the north of Mali, MLI-OTP-0012-0119, 0119, 0122-23; Report of the Secretary-General on the situation in Mali, MLI-OTP-0013-3480; Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, MLI-OTP-0014-5183, 5184-88; OCHA's Situation Report on Mali, MLI-OTP-0001-1459; Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, MLI-OTP-0013-3500; AQIM's Press release on the events in Gao, MLI-OTP-0010-0521; Key dates of the jihadist occupation in northern Mali, MLI-OTP-0033-3862.

<sup>57</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 3-5; Video of Ouman Ould Hamaha speaking about Ansar Dine's control of Timbuktu, MLI-OTP-0018-0352, from 00:00:00 to 00:00:41, MLI-OTP-0033-5448 (full French transcript); Video of Ansar Dine at Timbuktu airport, MLI-OTP-0018-0345; Video of Ansar Dine's flag at Timbuktu airport, MLI-OTP-0018-0195; Video of interview with Ansar Dine's member from the airport of Timbuktu, MLI-OTP-0018-0197 (Transcript, MLI-OTP-0033-5436); Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0059-0063; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0299, 0304-06.

religious and political edicts on the territory of Timbuktu and its people.<sup>58</sup> They did so through a local government, which included an Islamic tribunal, an Islamic police force, a media commission and a morality brigade.<sup>59</sup> This morality brigade was called the *Hesbah*.<sup>60</sup>

32. After living briefly in Algeria, Mr Al Mahdi returned to Mali around the beginning of April to provide support to these armed movements.<sup>61</sup> Mr Al Mahdi was in direct contact with the leaders of Ansar Dine and AQIM, including Iyad Ag Ghaly (the leader of Ansar Dine), Abou Zeid (the 'Governor' of Timbuktu under the armed groups), Yahia Abou Al Hammam (an AQIM chief) and Abdallah Al Chinguetti (a religious scholar within AQIM).<sup>62</sup> Mr Al Mahdi was viewed as an expert on matters of religion, and was consulted in this capacity, including by the Islamic tribunal.<sup>63</sup> Mr Al Mahdi was very active in aspects of the Ansar Dine and AQIM administration.<sup>64</sup>
33. Abou Zeid asked Mr Al Mahdi to lead the *Hesbah*, and he did so from its creation in April 2012 until September 2012.<sup>65</sup> He wrote a document on the role of the *Hesbah* and its objectives, which was then distributed to the other

<sup>58</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 10; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0052, 0082; Al Jazeera Report, MLI-OTP-0011-0415; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0314, 0332; Journalism Mission Authorisation, MLI-OTP-0002-0016 (English translation, MLI-OTP-0034-0202); Interview of Amputee, MLI-OTP-0001-7037, from 00:46:20 to 00:47:24, MLI-OTP-0024-2910, 2939-40 (French translation); Statement by P-111, MLI-OTP-0024-2467-R01, 2505, France 2 Report, MLI-OTP-0001-6954; Sahara Media press article, MLI-OTP-0015-0406.

<sup>59</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 9; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0053; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0316; List of the judges of the Islamic Court, MLI-OTP-0001-7369 (English translation, MLI-OTP-0034-0071).

<sup>60</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 7; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, pp. 4 and 5 (facts 14-20); Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0050; Sahara Media press article, MLI-OTP-0015-0406.

<sup>61</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 2 and 6.

<sup>62</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 7-9, 15 and 16; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0039-61, para. 154; Statement by P-65, MLI-OTP-0024-3096-R01, 3112-13; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0014-16; *Jeune Afrique* press article, MLI-OTP-0001-4044.

<sup>63</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 6-7, 18-19; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0050-53, para. 163; Statement by P-65, MLI-OTP-0024-3096-R01, 3109-12; Video, MLI-OTP-0009-1749, from 00:09:40:00 to 00:10:19:00.

<sup>64</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 14; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0051, para. 154.

<sup>65</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 8, 11; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0050, para. 151;

government structures put in place.<sup>66</sup> The *Hesbah* was entrusted with regulating the morality of the people of Timbuktu, and of preventing, suppressing and repressing anything perceived by the occupiers to constitute a visible vice.<sup>67</sup>

## 2. *Decision to attack the mausoleums and mosques*

34. The mausoleums of saints and mosques of Timbuktu are an integral part of the religious life of its inhabitants. Timbuktu's mausoleums and mosques constitute a common heritage for the community. These mausoleums are frequently visited by the residents – they are places of prayer and, for some, places of pilgrimage.<sup>68</sup>
35. When Abou Zeid and his collaborators were informed of the practices of the Timbuktu population related to these mausoleums, Mr Al Mahdi was asked to monitor the cemeteries visited by the residents.<sup>69</sup> The objective was to raise awareness among the population to stop such practices and, as the case may be, to prohibit them from pursuing them.<sup>70</sup> Mr Al Mahdi did this monitoring for around one month, taking notes on the inhabitants' behaviour at the

<sup>66</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 11; Statement by Mr Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4833, 4852; MLI-OTP-0033-4598, 4606.

<sup>67</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 12; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0050, Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0318.

<sup>68</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 26; P-151 testimony, ICC-01/12-01/15-T-5-CONF-ENG, p. 38, line 24, to p. 40, line 5, p. 44, line 11, to p. 45, line 2; Statement by P-151, MLI-OTP-0029-0843-R01, 0856; P-431 testimony, ICC-01/12-01/15-T-5-CONF-ENG, p. 77, line 25, to p. 81, line 13, p. 83, line 22, to p. 84, line 19, p. 92, lines 19-25; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0024-0537, 0547-49; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0340; UNESCO's Study on the mausoleums of Timbuktu, MLI-OTP-0015-0081, 0092; UNESCO's World Heritage List nomination file for Timbuktu, MLI-OTP-0013-3541, 3548-49, 3592-93; World Heritage List. Nomination file submitted by the Republic of Mali, MLI-OTP-0004-0361, 0374-76; UNESCO's World Heritage sites in Mali, MLI-OTP-0013-3630; Cultural heritage of Timbuktu: issues and prospects, MLI-OTP-0014-5751, 5823-30; UNESCO's International expert's meeting for the safeguarding of Mali's cultural heritage, MLI-OTP-0006-3459, 3470-73; Timbuktu wounded: a look at the scars left by the occupation of northern Mali, MLI-OTP-0014-5896, 5915; Video, MLI-OTP-0001-6939 (Transcript, MLI-OTP-0030-0108, 0109); UNESCO, Reconstruction of Timbuktu mausoleums near completion, MLI-OTP-0028-0833; Video, MLI-OTP-0018-0366 (Translated transcript, MLI-OTP-0022-0567); Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0018, 0024; Timbuktu-Mali conservation and management plan, MLI-OTP-0007-0002, 0038.

<sup>69</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 34; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 2 (fact 53).

<sup>70</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 34; Video, MLI-OTP-0018-0366 (Translated transcript, MLI-OTP-0022-0567); Statement by P-114, MLI-OTP-0023-0344-R01, 0373-74.

mausoleums, meeting with local religious leaders and explaining on the radio what could and could not be done at the mausoleums.<sup>71</sup>

36. In late June 2012, Ag Ghaly made the decision to destroy the mausoleums, in consultation with Al Chinguetti and Al Hammam.<sup>72</sup> Mr Al Mahdi was also consulted by Abou Zeid before this decision was made. Mr Al Mahdi expressed his opinion that all Islamic jurists agree on the prohibition of any construction over a tomb, but recommended not destroying the mausoleums so as to maintain relations between the population and the occupying groups.<sup>73</sup> Nevertheless, Ag Ghaly gave the instruction to proceed to Abou Zeid, who in turn transmitted it to Mr Al Mahdi in his capacity as the chief of the *Hesbah*.<sup>74</sup>
37. Despite his initial reservations, Mr Al Mahdi agreed to conduct the attack without hesitation on receipt of the instruction. He was conscious of the object of the common plan to attack these sites.<sup>75</sup> Mr Al Mahdi wrote a sermon dedicated to the destruction of the mausoleums, which was read at the Friday prayer at the launch of the attack.<sup>76</sup> He personally determined the sequence in which the buildings/monuments were to be attacked.<sup>77</sup>

<sup>71</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 35; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 6 (fact 37); Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (fact 53); Video, MLI-OTP-0018-0148 from 00:14:33:19 to end (Translated transcript, MLI-OTP-0025-0337, 0341).

<sup>72</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 38.

<sup>73</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 37; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 2 (fact 51).

<sup>74</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 24, 38-40.

<sup>75</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 40.

<sup>76</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 44; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (fact 54); Video, MLI-OTP-0018-0358 (Translated transcript, MLI-OTP-0025-0330, 0332).

<sup>77</sup> Agreement [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 45, 54. Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (fact 57); Statement by Mr Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4645, 4659-60, 4666, 4726.

### 3. *The attack and Mr Al Mahdi's responsibility*

38. The attack itself was carried out between around 30 June 2012 and 11 July 2012.<sup>78</sup> Ten of the most important and well-known sites in Timbuktu were attacked and destroyed by Mr Al Mahdi and other individuals adhering to the same common plan:

- (i) The Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit Mausoleum, on 30 June 2012: around 60 individuals, in the presence of Mr Al Mahdi and Al Chinguetti, razed the mausoleum to the ground. Armed men ensured the security of those who were actively engaged in destroying the mausoleum.<sup>79</sup>
- (ii) The Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum, on 30 June 2012; it was also destroyed.<sup>80</sup>
- (iii) The Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti Mausoleum, located in the Sidi El Mokhtar Cemetery and visited by pilgrims from and outside Mali, on 30 June 2012. Mr Al Mahdi supervised the destruction and gave instructions, along with tools, to the attackers. At the site, Mr Al Mahdi told journalists present that 'if a

<sup>78</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 30; Report by Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140; UNESCO Director-General calls for a halt to destruction of cultural heritage sites in Timbuktu, MLI-OTP-0001-1944.

<sup>79</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 61-63; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0066-68 (Videos MLI-OTP-0018-0354, MLI-OTP-0018-0360, MLI-OTP-0018-0363, MLI-OTP-0018-0375); Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0333-34 (Videos MLI-OTP-0012-1782, MLI-OTP-0012-1784), 0344-45 (Videos MLI-OTP-0001-6926, MLI-OTP-0001-7037 at 00:45:17 to 00:45:26); Report of Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140, 143-46, 0166-68, 0183-84; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0018.

<sup>80</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 64-65; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0761-67; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0068; Video, MLI-OTP-0018-0353; Report of Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140, 0165-66; Video, MLI-OTP-0018-0353; UNESCO's Study on the mausoleums of Timbuktu, MLI-OTP-0015-0081, 0086.



tomb is higher than the others, it must be levelled [...] we are going to rid the landscape of anything that is out of place'.<sup>81</sup>

- (iv) The Alpha Moya Mausoleum, located in the Alpha Moya Cemetery and visited in order to pray and make offerings, on 30 June 2012. Mr Al Mahdi directly participated and Abou Zeid also visited the site around the time of the attack. As previously, there was a security cordon of 30 combatants protecting those who engaged in the destruction.<sup>82</sup>
- (v) The Sheikh Mouhamad El Mikki Mausoleum, a place of spiritual retreat and reflection, located in the Three Saints Cemetery, on the following day, 1 July 2012. The mausoleum was completely destroyed.<sup>83</sup>
- (vi) The Sheikh Abdoul Kassim Attouaty Mausoleum, located in the Three Saints Cemetery and built in the sixteenth century, on 1 July 2012.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 66-72; Photograph, Malian Government, MLI-OTP-0009-1526; Malian Government's illustrated list of mausoleums and cemeteries, MLI-OTP-0001-7116, 7118; Statement by P-114, MLI-OTP-0023-0344-R01, 0364; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1196-99; Malian Government's Intelligence Bulletin on security situation in northern Mali, MLI-OTP-0012-0462, 0463-64; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0676-82; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0018-19, 0041; Video, MLI-OTP-0011-0459, from 00:00:00 to 00:00:08; UNESCO Director-General calls for a halt to destruction of cultural heritage sites in Timbuktu, MLI-OTP-0001-1944.

<sup>82</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 73-78; Malian Government's illustrated list of mausoleums and cemeteries, MLI-OTP-0001-7116; Photographs, Malian Government, MLI-OTP-0009-1508, MLI-OTP-0009-1509, MLI-OTP-0009-1513; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0043; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0685-95; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0334-36; Videos, MLI-OTP-0012-1792, MLI-OTP-0012-1793, MLI-OTP-0012-1787, MLI-OTP-0012-1789; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, page 4 (fact 69); Video, MLI-OTP-0001-7037 from 00:45:01:19 to 00:45:07:16; Report of Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140, 0146, 0184-85; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1187-95.

<sup>83</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 85-86; Photographs, Malian Government, MLI-OTP-0009-1495, MLI-OTP-0009-1562; Malian government's illustrated list of mausoleums and cemeteries, MLI-OTP-0001-7116; Statement by P-114, MLI-OTP-0023-0344-R01, 0365-66, paras. 78-80; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0657-67; Video, MLI-OTP-0012-1811; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1165-68; Photographs, MLI-OTP-0006-2243 to MLI-OTP-0006-2258.

<sup>84</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 87-88; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0647-56; Photograph, Malian Government, MLI-OTP-0009-1498; Statement by P-114, MLI-OTP-

(vii) The Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi Mausoleum, located in the Three Saints Cemetery, on 1 July 2012. Mr Al Mahdi physically participated in the attack, which completely destroyed the mausoleum.<sup>85</sup>

(viii) The door of the Sidi Yahia Mosque, on 2 July 2012. Legend had it that this door had not been opened for 500 years and that opening it would lead to the Last Judgment. Al Chinguetti told Al Mahdi that the door had to be opened, and both went to the site with pickaxes that Mr Al Mahdi bought with *Hesbah* funds. Mr Al Mahdi explained the destruction to journalists while it was taking place:

What you see here is one of the ways of eradicating superstition, heresy and all things or subterfuge which can lead to idolatry. We heard about a door in the ancient mosque of Sidi Yahya. If it is opened, the Day of Resurrection will begin. Following an investigation, we discovered that it was a condemned door in the courtyard of an old mosque. The door was condemned and bricked up. Over time, a myth took hold, claiming that the Day of Resurrection would begin if the door were opened. We fear that these myths will invade the beliefs of people and the ignorant who, because of their ignorance and their distance from religion, will think that this is the truth. So we decided to open it.<sup>86</sup>

(ix) and (x) The two mausoleums adjoining the Djingareyber Mosque (especially visited on Mondays and Fridays and for important religious celebrations), on or around 10-11 July 2012. Al Chinguetti asked

---

0023-0344-R01, 0366; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0337-39; Video, MLI-OTP-0012-1801; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1169-72.

<sup>85</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 82-84; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0637-46; Malian Government's illustrated list of mausoleums and cemeteries, MLI-OTP-0001-7116; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0021, 0029-40; Videos, MLI-OTP-0018-0366, MLI-OTP-0018-0374; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1173-77.

<sup>86</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 89-95; Malian government's communication, MLI-OTP-0012-0259; Malian government's Intelligence Bulletin on the situation in Timbuktu, MLI-OTP-0012-0260; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0024-0537, 0557-65; Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1151-57; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0022-23, 0031-35; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0070-71; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0340-41; Videos, MLI-OTP-0012-1918, MLI-OTP-0012-1919; Report of Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140, 0160-61, 0190-93; Video, MLI-OTP-0018-0212; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0071-72; Video, MLI-OTP-0018-0149 (Translated transcript, MLI-OTP-0024-2954, 2958-59), Video, MLI-OTP-0018-0209 (Translated transcript, MLI-OTP-0033-5439, 5441).

Mr Al Mahdi to destroy the mausoleums, who agreed and oversaw the attack. Mr Al Mahdi physically took part in the destruction, and decided at one point that a bulldozer should be used. When the attackers were clearing the rubble towards the end of the acts of destruction, Abou Zeid and Al Chinguetti, among others, came to provide and demonstrate their support at the site. The mausoleums destroyed were the Ahmed Fulane Mausoleum and the Bahaber Babadié Mausoleum.<sup>87</sup>

39. All these sites were dedicated to religion and historic monuments, and were not military objectives.<sup>88</sup> With the exception of the Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum, all these buildings had the status of protected UNESCO World Heritage sites.<sup>89</sup>
40. Mr Al Mahdi knew that he exercised joint control over the attack and was fully implicated in its execution.<sup>90</sup> He contributed to the attack in the following ways:

<sup>87</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 96-103; Malian Government's illustrated list of mausoleums and cemeteries, MLI-OTP-0001-7116, 7118; Photographs, MLI-OTP-0009-1478, MLI-OTP-0009-1483; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0729-39; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0036; Video, MLI-OTP-0018-0148, especially 00:04:11:00–00:04:55:00, 00:07:35:00–00:08:28:00; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, page 6 (fact 36); Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0073-74; Videos, MLI-OTP-0018-0334, MLI-OTP-0018-0336, MLI-OTP-0018-0341; Report of Expert Witness P-75, MLI-OTP-0033-0140, 0163-65; Video, MLI-OTP-0012-1815; Statement by P-66, MLI-OTP-0019-0296-R01, 0343; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 73); Report of Expert Witnesses P-55 and P-57, MLI-OTP-0029-1138, 1158-64; Photograph, MLI-OTP-0018-2281.

<sup>88</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 105; P-151 testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 39, line 4, to p. 40, line 5, p. 42, lines, 15-22, p. 44, line 11, to p. 45, line 2, p. 59, line 13, to p. 61, line 9; P-431 testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 79, line 12, to p. 81, line 4; Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0017; Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0028-0586, 0596-98; UNESCO's Study on the mausoleums of Timbuktu, MLI-OTP-0015-0081, 0092; UNESCO's Report on the Government's priorities for the world heritage sites threatened by the armed conflict in northern Mali, MLI-OTP-0017-0706; Cultural heritage of Timbuktu: issues and prospects, MLI-OTP-0014-5751, 5823-58; Timbuktu-Mali conservation and management plan, MLI-OTP-0007-0002, 0027-29, 0038.

<sup>89</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 33; UNESCO's World Heritage Convention Nomination Documentation, MLI-OTP-0004-0321; UNESCO's World heritage sites in Mali, MLI-OTP-0013-3630, 3715-26; Report of the World Heritage Committee, MLI-OTP-0006-3298, 3314; UNESCO's international experts meeting for the safeguarding of Mali's cultural heritage, MLI-OTP-0006-3459; P-151 testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 53, line 17, to p. 55, line 23; Statement by P-151, MLI-OTP-0029-0843-R01, 0861.

<sup>90</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 52 and 106.

- (i) he supervised the execution of the operations, using his men from the *Hesbah* and overseeing the other attackers who came to participate in the operations;<sup>91</sup>
- (ii) he collected, bought and distributed the necessary tools/means in order to successfully carry out the attack;<sup>92</sup>
- (iii) he was present at all of the attack sites, giving instructions and moral support;<sup>93</sup>
- (iv) he personally participated in the attack that led to the destruction of at least five sites: (a) the Alpha Moya Mausoleum;<sup>94</sup> (b) the Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi Mausoleum;<sup>95</sup> (c) the door of the Sidi Yahia

<sup>91</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 48 and 49; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (facts 56 and 59).

<sup>92</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 47 and 48; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 4 (fact 20); Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, pp. 3 and 4 (facts 61 and 62).

<sup>93</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 49; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (fact 63); Sidi Mahamoud: Statement by Ahmad Al Faqi Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4667, 4670-72; Video, MLI-OTP-0018-0357; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0067; Sidi El Mokhtar: Video, MLI-OTP-0001-7037 from 00:45:08 to 00:45:15; Alpha Moya Cemetery: Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, page 4 (fact 69); Video, MLI-OTP-0001-7037 from 00:45:01 to 00:45:07; Three Saints Cemetery: Video, MLI-OTP-0018-0365; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 6 (facts 29-30); Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 68), Statement by P-125, MLI-OTP-0023-0004-R01, 0030-31, 0035, Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0069; Video, MLI-OTP-0012-1800; Sidi Yahia Mosque: First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 6 (facts 31-32); Video, MLI-OTP-0012-1928; Video, MLI-OTP-0018-0149, from 00:03:21 to 00:04:27; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 70); Djingareyber Mosque: First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 6 (fact 36); Video, MLI-OTP-0018-0148, from 00:07:35 to 00:13:19; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 71); Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0073.

<sup>94</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 77; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 69); Video, MLI-OTP-0001-7037 from 00:45:01 to 00:45:07.

<sup>95</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 83; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 5 (fact 29); Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 68); Video, MLI-OTP-0018-0365.

Mosque;<sup>96</sup> (d) the Ahmed Fulane Mausoleum; and (e) the Bahaber Babadié Mausoleum;<sup>97</sup> and

- (v) he was responsible – having been designated by Al Chinguetti – for communicating with journalists to explain and justify the attack.<sup>98</sup>

41. During one such press interview in the course of the attack, Mr Al Mahdi said the following:

I don't know the truth about those saints. We just know that fools [...] come and take sand from those places to get blessed [...]. That's why we consider this campaign as an effort that's exerted in collaboration with the imams [...] We only paid attention to the buildings constructed above the graves in the cemetery, and the tombs that are annexed to the mosques from the outside. [...] As for demolishing these buildings, [...] we think that we've already introduced this matter gradually, as we've spent four months explaining to the people what's right and what's wrong, and now's the time for implementation.<sup>99</sup>

### C. Findings

42. On the basis of the Accused's statements in open court and the Agreement, the Chamber is satisfied that the Accused understands the nature and consequences of the admission of guilt and that the admission was voluntarily made after sufficient consultation with Defence counsel. With reference to the

<sup>96</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), paras. 92-93; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 5 (fact 32); Video, MLI-OTP-0018-0149, from 00:03:21 to 00:04:27; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 70).

<sup>97</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 100; First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, p. 6 (fact 36); Video, MLI-OTP-0018-0148, from 00:07:35 to 00:13:19; Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 4 (fact 71); Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0073.

<sup>98</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 51; Statement by P-65, MLI-OTP-0020-0019-R01, 0073, para. 245, 0067, paras. 225 and 226; Video MLI-OTP-0001-7037, from 00:45:08:12 to 00:45:17; Video, MLI-OTP-0009-1749, from 00:13:50 to 00:15:27 (Transcript, MLI-OTP-0028-0839, 0848-49); First Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-54-Conf-AnxA, pp. 5 and 6 (facts 28, 33-45); Video, MLI-OTP-0018-0149, from 00:09:13 to 00:10:11 (Transcript, MLI-OTP-0024-2954, 2958-59) Video, MLI-OTP-0018-0148, from 00:13:24 to 00:17:36 (Transcripts, MLI-OTP-0028-0839, 0848-49); Video, MLI-OTP-0011-0177, from 00:00:30 to 00:00:40 (Transcript, MLI-OTP-0025-0333, 0335); Video MLI-OTP-0025-0174, from 00:02:09 to 00:02:27, from 00:01:13 to 00:01:33 (Transcript, MLI-OTP-0033-5504, 5506-07); Video, MLI-OTP-0018-0209 (Transcript, MLI-OTP-0033-5439, 5441) Video, MLI-OTP-0018-0358 (Transcript, MLI-OTP-0025-0330, 0332); Video, MLI-OTP-0018-0357 (Transcript, MLI-OTP-0025-0327); Video, MLI-OTP-0001-7037, at 00:45:08 (Transcript, MLI-OTP-0024-2962, 2989); Second Agreed Facts, ICC-01/12-01/15-83-Conf-AnxA, p. 3 (facts 65 and 66).

<sup>99</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), para. 101; Video, MLI-OTP-0018-0148 (Transcript, MLI-OTP-0025-0337, 0341).

'Established facts of the case' section above, the Chamber is also satisfied that the admission of guilt is supported by the facts of the case.

43. The Chamber finds beyond reasonable doubt that the admission of guilt, together with the additional evidence presented, satisfies the essential facts to prove the crime charged and that there are no viable affirmative defences.
44. In particular, the Chamber emphasises that it considers the Agreement and Mr Al Mahdi's admissions to be both credible and reliable in full. Mr Al Mahdi went into extensive detail as to the events in question, often volunteering specific information not strictly necessary in order to prove the charge. The Chamber has been able to independently corroborate almost all of Mr Al Mahdi's account with the evidence before the Chamber, strongly indicating that the entire account is true.

1. *Findings on Article 8(2)(e)(iv) of the Statute*

45. The facts of the case demonstrate that Mr Al Mahdi, in his capacity as head of the *Hesbah*, was put in charge of the execution phase of destroying the 10 mausoleums and mosques specified in the previous sub-section. Mr Al Mahdi and the attackers accompanying him directed an attack on these buildings, resulting in destruction or significant damage to all of them.
46. These mausoleums and mosques all qualify as both religious buildings and historic monuments, as evidenced by their role in the cultural life in Timbuktu and the status of nine of these buildings as UNESCO World Heritage sites. UNESCO's designation of these buildings reflects their special importance to international cultural heritage, noting that 'the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must

fulfil in a spirit of mutual assistance and concern'.<sup>100</sup> Attacking these mausoleums and mosques was clearly an affront to these values; as Mr Al Mahdi said himself during the Djingareyber Mosque attack:

It's probably the oldest mosque here in town, and is considered a heritage site [...] a World Heritage Site. There are so many rumours relating to these shrines [...]. Those UNESCO jackasses – this [...] they think that this is heritage. Does 'heritage' include worshipping cows and trees?<sup>101</sup>

47. These mausoleums and mosques were also clearly the object of the attack, as the evidence establishes the deliberate manner in which the attackers went from one building to the next in a relatively short time period.
48. The Chamber also notes the common *modus operandi* according to which each of the buildings was attacked, from common tools to armed guards protecting the attackers. The circumstances of the attack, as well as Mr Al Mahdi's statements that the purpose of the operation was to destroy these buildings, demonstrate that the perpetrators intended these buildings to be the object of the attack.
49. The Chamber is satisfied that these acts took place in the context of and were associated with a non-international armed conflict between Malian Government forces and groups including Ansar Dine and AQIM. The evidence demonstrates that Ansar Dine and AQIM qualified as organised armed groups at the relevant time, with the Chamber noting in particular their military capacity to displace the Malian army, capture Timbuktu and exercise some form of government over it for approximately nine months. With respect to the requirement that the armed violence must meet a certain minimum level of intensity to be distinguished from mere internal disturbances and tensions, the Chamber notes that the fact that these groups exercised control over such a large part of Mali for such a protracted period – with the resulting effect on the

<sup>100</sup> [Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization](#), 16 November 1945, preamble.

<sup>101</sup> Video, MLI-OTP-0018-0148 (Translated transcript, MLI-OTP-0025-0337, 0340).

civilian population concerned – clearly demonstrates a sufficient degree of intensity of the conflict. It would not have been possible for these armed groups to carry out the attack without their conquest of Timbuktu, and the justifications stated during the attack were the same as those advanced by the armed groups for taking over Timbuktu and Northern Mali more generally.<sup>102</sup>

50. The Chamber also notes that there is no evidence in the record of any foreign intervention in opposition to the Malian forces in the relevant time period, nor have the parties claimed that there was any involvement by another State that could potentially affect the classification of the conflict. This means that there is no evidence that the armed conflict became internationalised or should have been classified as international from the outset.
51. Given that Mr Al Mahdi and the attackers were based in Timbuktu and worked pursuant to Ansar Dine's administration of the city, the Chamber is also satisfied that the perpetrators were aware of the factual circumstances which established the existence of the armed conflict.
52. In view of these findings, the Chamber considers that all the elements for the war crime of attacking protected objects are established.

2. *Findings on Article 25(3)(a) of the Statute (co-perpetration) and other modes of liability*

i. *Article 25(3)(a) co-perpetration*

53. The Chamber notes its findings on Mr Al Mahdi's contributions to the crimes, including his involvement in planning and preparing the attack. Mr Al Mahdi was the head of the *Hesbah*, one of four primary institutions established by

---

<sup>102</sup> Video of 12 March 2012, MLI-OTP-0001-6924 (indicating that the group wants to introduce sharia for its members and other Muslims for peace and security in Mali); *Jeune Afrique* articles of 15 March and 8 April 2012, MLI-OTP-0001-3418, MLI-OTP-0001-3551; Video, MLI-OTP-0001-7037, from 00:19:30 to 00:20:12 (Transcript MLI-OTP-0024-2962, 2978); *Sahara Media* article of 16 April 2012, MLI-OTP-0001-3271.



Ansar Dine and AQIM upon occupying Timbuktu.<sup>103</sup> He had overall responsibility for the execution phase of the attack, determining the sequence in which the buildings would be destroyed, making the necessary logistical arrangements and justifying the attack to the broader world through media interviews. Mr Al Mahdi personally oversaw the attack itself – he was present at all of the attack sites and directly participated in the destruction of five of the protected buildings. The Chamber considers that Mr Al Mahdi’s contributions collectively qualify as an essential contribution with the resulting power to frustrate the commission of the crime.

54. The Chamber is also satisfied that Mr Al Mahdi’s contributions were made pursuant to an agreement with others which led to the commission of the crimes. This is evidenced by: (i) Mr Al Mahdi’s role in the Ansar Dine leadership; (ii) the effective decision taken by Mr Ag Ghaly and other leadership to attack the mausoleums/mosques; (iii) Mr Al Mahdi’s sermon on destroying the buildings immediately before the attack; (iv) Mr Al Mahdi’s choice of the sequence in which the buildings would be destroyed; and (v) the coordinated and deliberate manner in which the attack was carried out.
55. Noting Mr Al Mahdi’s direct participation in many incidents and his role as media spokesperson in justifying the attack, the Chamber is also satisfied that Mr Al Mahdi personally meets the subjective elements of the crimes.
56. For these reasons, the Chamber considers all the elements of Article 25(3)(a) co-perpetration to be established.

---

<sup>103</sup> See para. 31 of the present Judgment.

ii. *Other modes of liability*

57. The Chamber notes that the Pre-Trial Chamber confirmed co-perpetration along with other modes of liability in the alternative, namely: (i) Article 25(3)(b) (soliciting and inducing); (ii) Article 25(3)(c) (aiding and abetting) and (iii) Article 25(3)(d) (contributing in any other way). Mr Al Mahdi accepts that all charged modes of liability, including co-perpetration, are established.
58. The Appeals Chamber has noted that the Statute differentiates between principal (Article 25(3)(a)) and accessorial (Article 25(3)(b) to (d)) liability, with principals bearing more blameworthiness ‘generally speaking and all other things being equal’.<sup>104</sup> In accordance with this general rule, given that the Chamber has decided that all the elements of co-perpetration are met, there is no need to make any further findings on the accessorial liability alternatives.
59. The Chamber further notes that the Pre-Trial Chamber confirmed Article 25(3)(a) direct perpetration for the five buildings where Mr Al Mahdi personally participated in the destruction. On the basis of the analysis above, and noting that Article 8(2)(e)(iv) of the Statute criminalises the act of directing a specific kind of attack irrespective of whether the buildings in question are destroyed, the Chamber considers that Mr Al Mahdi satisfies all the elements for both direct perpetration and co-perpetration. The Prosecution submits that conviction as a co-perpetrator, rather than direct perpetrator, would ‘fully and accurately reflect the Accused’s individual criminal responsibility’.<sup>105</sup> Neither the Defence nor the LRV take a position on this point.
60. There is no indication in either the Statute or Appeals Chamber jurisprudence of any hierarchy within the variations set out under Article 25(3)(a) of the

<sup>104</sup> Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Public redacted Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 1 December 2014, [ICC-01/04-01/06-3121-Red](#), para. 462.

<sup>105</sup> The Prosecution’s submissions in support of conviction under Article 65(2) of the Statute, ICC-01/12-01/15-120-Conf, para. 31.

Statute, nor does the Chamber believe that establishing one is necessary or appropriate. The Chamber considers that, when all the elements of different variations under Article 25(3)(a) of the Statute are proven, the Chamber must elect which mode of responsibility best reflects the full scope of the Accused's individual criminal responsibility. The Accused can be convicted of only one form of Article 25(3)(a) commission for each incident or discrete type of criminal conduct, as to conclude otherwise not only contributes little to the fair labelling of the responsibility of the accused but it also punishes them twice for the commission of the same crime.

61. As also submitted by the Prosecution, the Chamber notes that Mr Al Mahdi oversaw the entire attack against all 10 buildings, and that co-perpetration encapsulates not only his physical participation but also his position of authority in relation to the crimes committed. The Chamber finds that attacking all 10 mausoleums/mosques as a co-perpetrator best reflects Mr Al Mahdi's criminal responsibility. On this finding, Mr Al Mahdi's direct participation in relation to five of the attacks supports the Chamber's conclusions that he made an essential contribution to the crimes charged pursuant to a joint criminal plan.

#### **D. Conclusion**

62. In the light of the admission of guilt, the hearings held and the evidence brought forward, the Chamber is satisfied beyond reasonable doubt that all the essential facts of the crime charged are proven.
63. Pursuant to Articles 8(2)(e)(iv), 25(3)(a) and 65(2) of the Statute, the Chamber convicts Mr Al Mahdi as a co-perpetrator for attacking the following protected objects in Timbuktu, Mali between around 30 June 2012 and 11 July 2012: (i) the Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit Mausoleum; (ii) the Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum; (iii) the Sheikh Sidi El Mokhtar

Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti Mausoleum; (iv) the Alpha Moya Mausoleum; (v) the Sheikh Mouhamad El Mikki Mausoleum; (vi) the Sheikh Abdoul Kassim Attouaty Mausoleum; (vii) the Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi Mausoleum; (viii) the Sidi Yahia Mosque door and the two mausoleums adjoining the Djingareyber Mosque, namely the (ix) Ahmed Fulane Mausoleum and (x) Bahaber Babadié Mausoleum.

### III. Sentence

64. Having concluded that Mr Al Mahdi is responsible for intentionally attacking the above-mentioned protected objects as a co-perpetrator, the Chamber will now turn to the determination of the appropriate sentence. The submissions made by the parties and participants are addressed in the course of the analysis.

#### A. Applicable law

65. For the purposes of determining the appropriate sentence, the Chamber has taken into account, *inter alia*, Articles 23, 76, 77, and 78 of the Statute and Rule 145 of the Rules.

66. The Chamber notes that Articles 77 and 78 of the Statute do not specify the purpose of criminal punishment. However, in the Preamble of the Statute it is declared that 'the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished'.<sup>106</sup> Furthermore, in establishing the ICC, the States Parties were '[d]etermined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes'.<sup>107</sup> Accordingly, the Chamber considers that the

---

<sup>106</sup> Preamble of the Statute, para. 4.

<sup>107</sup> Preamble of the Statute, para. 5.

Preamble establishes retribution and deterrence as the primary objectives of punishment at the ICC.<sup>108</sup>

67. With regard to retribution, the Chamber clarifies that it is not to be understood as fulfilling a desire for revenge, but as an expression of the international community's condemnation of the crimes, which, by way of imposition of a proportionate sentence, also acknowledges the harm to the victims and promotes the restoration of peace and reconciliation. In respect of deterrence, the Chamber considers that a sentence should be adequate to discourage a convicted person from recidivism (specific deterrence), as well as to ensure that those who would consider committing similar crimes will be dissuaded from doing so (general deterrence). Lastly, the extent to which the sentence reflects the culpability of the convicted person addresses the desire to ease that person's reintegration into society, although, in particular in the case of international criminal law, this goal cannot be considered to be primordial and should therefore not be given any undue weight.<sup>109</sup> As reflected in Article 81(2)(a) of the Statute and Rule 145(1) of the Rules, and as emphasised by the Appeals Chamber, the sentence must be proportionate to the crime and the culpability of the convicted person.<sup>110</sup>
68. The Appeals Chamber has found that the relevant provisions of the Statute and Rules, when read together with the underlying objectives set out in the Preamble, establish a comprehensive scheme for the determination of a sentence. The Chamber must first identify and assess the relevant factors in

<sup>108</sup> See also, Trial Chamber II, *The Prosecutor v. Germain Katanga*, Decision on Sentence pursuant to article 76 of the Statute, 23 May 2014, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corr](#), paras. 37-38 ('Katanga Sentencing Decision'); Trial Chamber III, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 21 June 2016, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 10 ('Bemba Sentencing Decision').

<sup>109</sup> Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corr](#), para. 38.

<sup>110</sup> Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo against the "Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute", 1 December 2014, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 40 ('Lubanga AJ Sentencing Decision'); See also Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 11.

Article 78(1) and Rule 145(1)(c) and (2).<sup>111</sup> It must then balance all these factors in accordance with Rule 145(1)(b) and pronounce a sentence for each crime.<sup>112</sup> The Chamber has considerable discretion in imposing a proportionate sentence.<sup>113</sup> Lastly, once the sentence has been imposed, Article 78(2) requires deduction of the time the convicted person has spent in detention upon an order of the Court.<sup>114</sup>

69. With regard to the interplay between the factors identified in Article 78(1) and Rule 145(1)(c), the Appeals Chamber has not found it necessary to decide which of the possible approaches is the correct one.<sup>115</sup> The Chamber notes that Trial Chambers I and II considered the Rule 145(1)(c) factors in their assessment of the Article 78(1) factors.<sup>116</sup> In addition, Trial Chamber III considered some of them to be relevant to the assessment of the existence of aggravating and mitigating circumstances.<sup>117</sup> In its assessment of all relevant factors, the Chamber has considered certain Rule 145(1)(c) factors to be relevant for the evaluation of the mitigating and aggravating circumstances identified in Rule 145(2).<sup>118</sup>
70. In considering all relevant factors, the Chamber cannot ‘double-count’ any factors assessed in relation to the gravity of the crime as aggravating

<sup>111</sup> Lubanga AJ Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 32.

<sup>112</sup> Lubanga AJ Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 33.

<sup>113</sup> Lubanga AJ Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 34.

<sup>114</sup> Lubanga AJ Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 35.

<sup>115</sup> Lubanga AJ Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-3122](#), paras. 61-66.

<sup>116</sup> Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Decision on Sentence Pursuant to Article 76 of the Statute, 10 July 2012, [ICC-01/04-01/06-2901](#), para. 44 (‘Lubanga Sentencing Decision’); Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#), paras. 44-69.

<sup>117</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 13.

<sup>118</sup> For example, the Chamber has considered the discriminatory nature of the attack as relevant for the assessment of the gravity of the crime rather than as an aggravating circumstance.

circumstances and vice versa. Further, a legal element of the crimes or mode of liability cannot be considered as an aggravating circumstance.<sup>119</sup>

### 1. *Gravity of the crime*

71. In order to determine a proportionate sentence, the gravity of the acts committed by the convicted person has to be assessed *in concreto*, in the light of the particular circumstances of the case. The sentences to be imposed must, therefore, reflect the gravity of the crime charged.
72. In this respect, the Chamber emphasises that the present decision must be read while bearing in mind that the Court has jurisdiction for the most serious crimes of concern to the international community as a whole and that, as a consequence, the sentences should reflect that seriousness. That being said, not all crimes forming the grounds for a criminal conviction are necessarily of equivalent gravity and the Chamber has the duty to weigh each by distinguishing, for example, between those against persons and those targeting property.<sup>120</sup>

### 2. *Aggravating and mitigating circumstances*

73. The Chamber must be convinced of the existence of aggravating circumstances beyond reasonable doubt. Aggravating circumstances must relate to the crimes of which a person was convicted or to the convicted person himself. The absence of a mitigating circumstance does not serve as an aggravating circumstance.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 14 and footnotes, in particular: Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#); Lubanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-2901](#), para. 35.

<sup>120</sup> Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#), paras. 42 and 43.

<sup>121</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 18 and footnotes, in particular: Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#), para. 34; Lubanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-2901](#), para. 33.

74. The Chamber must be convinced of the existence of mitigating circumstances on a balance of probabilities. Mitigating circumstances need not be directly related to the crimes and are not limited by the scope of the charges or the Judgment. They must, however, relate directly to the convicted person. The Chamber has a considerable degree of discretion, in the light of the particular circumstances of the case, in determining what constitutes a mitigating circumstance and the weight, if any, to be accorded to it. While the Chamber must consider any mitigating circumstances, it need not do so under any particular heading or according to any particular rubric. For example, the Chamber may consider certain factors as being relevant to its assessment of the gravity of the crime, instead of considering them in mitigation or aggravation of the overall sentence.<sup>122</sup>

### **B. Analysis**

75. In order to determine the appropriate sentence, the Chamber will consider: (i) the gravity of the crime; (ii) Mr Al Mahdi's culpable conduct; and (iii) his individual circumstances. Rule 145(1)(c) factors and aggravating and mitigating circumstances are discussed in the course of the analysis, when relevant.

#### *1. Gravity of the crime*

76. In addressing the gravity of the crime committed, the Chamber considered, in particular, the extent of damage caused, the nature of the unlawful behaviour and, to a certain extent, the circumstances of the time, place and manner.

77. The Chamber first notes that, unlike other accused convicted by this Court, Mr Al Mahdi is not charged with crimes against persons but with a crime

---

<sup>122</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 19 and footnotes, in particular: Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#), paras. 32 and 34; Lubanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/06-2901](#), para. 34.



against property. In the view of the Chamber, even if inherently grave, crimes against property are generally of lesser gravity than crimes against persons.<sup>123</sup>

78. With regard to the extent of the damage caused, the Chamber recalls that most of the 10 sites were completely destroyed.<sup>124</sup> Moreover, the attack was carefully planned<sup>125</sup> and lasted approximately 10 days.<sup>126</sup> Additionally, the impact of the attack on the population was heightened by the fact that it was relayed in the media.<sup>127</sup> The Chamber also notes the testimony of P-431 (a Malian expert in cultural matters) and P-151 (a UNESCO witness), who explained that Timbuktu was an emblematic city with a mythical dimension and that it played a crucial role in the expansion of Islam in the region. Timbuktu is at the heart of Mali's cultural heritage, in particular thanks to its manuscripts and to the mausoleums of the saints.<sup>128</sup> The mausoleums reflected part of Timbuktu's history and its role in the expansion of Islam. They were of great importance to the people of Timbuktu, who admired them and were attached to them. They reflected their commitment to Islam and played a psychological role to the extent of being perceived as protecting the people of Timbuktu.<sup>129</sup> P-151 also described how the people of Timbuktu were collectively ensuring that the mausoleums remained in good condition in the course of symbolic maintenance events involving the entire community – women and elderly and young people.<sup>130</sup> The mausoleums were among the most cherished buildings of the city and they were visited by

<sup>123</sup> Katanga Sentencing Decision, [ICC-01/04-01/07-3484-tENG](#), paras. 42 and 43; see also Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 121-123, 127-128.

<sup>124</sup> See para. 38 of the present Judgment.

<sup>125</sup> See paras. 35-37 of the present Judgment; see also Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 37.

<sup>126</sup> See para. 38 of the present Judgment; see also Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 37.

<sup>127</sup> See para. 40(v) of the present Judgment; see also Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 35, 37.

<sup>128</sup> P-431's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 77, line 23, to p. 80, line 7; P-151's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 41, line 12, to p. 44, line 11.

<sup>129</sup> P-431's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 80, line 8, to p. 81, line 4; P-151's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 44, line 11, to p. 45, line 9.

<sup>130</sup> P-151's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 38, line 23, to p. 40, line 5.

the inhabitants of the city, who used them as a place for prayer while some used them as pilgrimage locations.<sup>131</sup>

79. Thus, the Chamber considers that the fact that the targeted buildings were not only religious buildings but had also a symbolic and emotional value for the inhabitants of Timbuktu is relevant in assessing the gravity of the crime committed.
80. Furthermore, all the sites but one (the Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum) were UNESCO World Heritage sites and, as such, their attack appears to be of particular gravity as their destruction does not only affect the direct victims of the crimes, namely the faithful and inhabitants of Timbuktu, but also people throughout Mali and the international community.<sup>132</sup> The Chamber notes the testimony of P-431, who indicated that the people of Timbuktu protested against the destruction and refused to see the mausoleums razed to the ground. The witness testified that destroying the mausoleums, to which the people of Timbuktu had an emotional attachment, was a war activity aimed at breaking the soul of the people of Timbuktu. In general, the population of Mali, who considered Timbuktu as a source of pride, were indignant to see these acts take place.<sup>133</sup> Moreover, P-151 described how the entire international community, in the belief that heritage is part of cultural life, is suffering as a result of the destruction of the protected sites.<sup>134</sup>
81. Lastly, the Chamber notes that the crime was committed for religious motives.<sup>135</sup> Indeed, during the period they ruled over the territory of Timbuktu, Ansar Dine and AQIM took measures to impose their religious edicts on the

<sup>131</sup> See para. 34 of the present Judgment. See also, LRV Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-135-Conf, paras. 26-31.

<sup>132</sup> See paras. 39 and 46 of the present Judgment. See also, Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 17-29, 61.

<sup>133</sup> P-431's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 89, line 6, to p. 90, line 13.

<sup>134</sup> P-151's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 59, line 11, to p. 61, line 9.

<sup>135</sup> See Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 30, 62-63.

population.<sup>136</sup> The creation of the *Hesbah*, which was headed by Mr Al Mahdi, was meant precisely to eradicate any visible vice it identified in Timbuktu.<sup>137</sup> As established in the present Judgment, when the leaders of Ansar Dine discovered the practices of the inhabitants of Timbuktu, they led a campaign explaining what should and should not be done with the mausoleums. In the end they decided to destroy the sites in order to stop these prohibited practices.<sup>138</sup> The Chamber considers that the discriminatory religious motive invoked for the destruction of the sites is undoubtedly relevant to its assessment of the gravity of the crime.

82. The Chamber concludes that the crime for which Mr Al Mahdi is convicted is of significant gravity.

2. *Mr Al Mahdi's culpable conduct*

83. In addressing Mr Al Mahdi's culpable conduct the Chamber has considered the following Rule 145(1)(c) criteria: his degree of participation, his degree of intent and, to a certain extent, the means employed to execute the crime.
84. The Chamber recalls that it has found that Mr Al Mahdi committed, jointly with others, the crime of intentionally attacking the protected objects mentioned earlier. The Chamber notes that Mr Al Mahdi played an essential role in the execution of the attack. As the head of the *Hesbah*,<sup>139</sup> he was entrusted with executing the common plan. He organised all the logistics of the attack, oversaw the entire operation, supervised its execution, decided in which order the sites should be destroyed, collected and distributed the necessary

<sup>136</sup> See para. 31 of the present Judgment.

<sup>137</sup> See para. 33 of the present Judgment.

<sup>138</sup> See paras. 35 and 36 of the present Judgment.

<sup>139</sup> See para. 33 of the present Judgment.

tools, provided logistical and moral support to the direct perpetrators and supervised them, and was present at every site.<sup>140</sup>

85. In relation to Mr Al Mahdi's intent, the Chamber further notes that, in addition to attending the destruction of each site, Mr Al Mahdi personally participated in the destruction of at least five of the sites.<sup>141</sup> Moreover, he justified the necessity of the attack by writing a sermon that was read before the attack and by giving public speeches as the destruction was occurring.<sup>142</sup>

*i. Absence of aggravating circumstances*

86. The Chamber is not convinced by the Prosecution's submission that Mr Al Mahdi abused his power and official capacity as head of the *Hesbah* and that this is an aggravating circumstance.<sup>143</sup> Indeed, in line with the Appeals Chamber's jurisprudence,<sup>144</sup> the Chamber considers that the mere fact that Mr Al Mahdi committed the crime in this position does not as such constitute an aggravating circumstance. Furthermore, as discussed below,<sup>145</sup> in his capacity as head of the *Hesbah*, Mr Al Mahdi initially advised against the destruction of the buildings.
87. In relation to the Prosecution's argument<sup>146</sup> that the fact that the crime affected multiple victims is an aggravating circumstance, the Chamber has already taken into account the far-reaching impact of the crime committed by

<sup>140</sup> See para. 40 of the present Judgment.

<sup>141</sup> See para. 40(iv) of the present Judgment; see also Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 34.

<sup>142</sup> See paras. 37, 40(v) and 41 of the present Judgment; see also Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 35, 42.

<sup>143</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 58-60.

<sup>144</sup> Lubanga AJ Sentencing Judgment, [ICC-01/04-01/06-3122](#), para. 82.

<sup>145</sup> See para. 89 of the present Judgment.

<sup>146</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 61.

Mr Al Mahdi in its assessment of the gravity of the crime and cannot therefore consider it as an aggravating circumstance.<sup>147</sup>

88. Similarly, the Chamber has already considered the religious nature of the attack as part of its assessment of the gravity of the crime.<sup>148</sup> Accordingly it cannot be considered as an aggravating circumstance.

*ii. Mitigating circumstances: reluctance to commit the crime and means of execution*

89. The Chamber notes that, despite accepting the decision to destroy the sites and his full implication in its commission, Mr Al Mahdi was initially reluctant to destroy them. The Chamber recalls that it has found that, having observed the practice of the population of Timbuktu, Mr Al Mahdi indicated that, even if it was widely accepted among the Islamic legal community that such practices were prohibited, it would be preferable not to destroy the mausoleums so as to preserve good relations with the population of Timbuktu.<sup>149</sup> The Chamber finds that this reluctance is of some relevance for the determination of the sentence and attaches weight to it.

90. The Chamber clarifies that, contrary to the Defence's submissions,<sup>150</sup> the fact that Mr Al Mahdi committed the crime as part as an organised group does not constitute a mitigating circumstance. As established in the present Judgment,<sup>151</sup> once the decision to destroy the sites had been taken by other members of the group, Mr Al Mahdi fully endorsed it and he was fully implicated in the execution of the attack.

<sup>147</sup> See paras. 78-80 of the present Judgment.

<sup>148</sup> See para. 81 of the present Judgment.

<sup>149</sup> See para. 36 of the present Judgment.

<sup>150</sup> Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 158-163.

<sup>151</sup> See paras. 37 and 40 of the present Judgment.

91. Furthermore, the Chamber notes that, except for the destruction at the Djingareyber mosque, for which he recommended that a bulldozer be used,<sup>152</sup> Mr Al Mahdi advised against using a bulldozer at all the other sites so as not to damage the graves next to the mausoleums<sup>153</sup> and made sure that the attackers showed respect for the constructions next to the mausoleums while carrying out the attack.<sup>154</sup>
92. With regard to Mr Al Mahdi's alleged lack of preparation for assuming responsibilities as head of the *Hesbah*,<sup>155</sup> the Chamber notes that the Defence does not make any effort to support this argument and therefore rejects it.
93. In sum, the Chamber considers that Mr Al Mahdi's initial reluctance to destroy the sites, as well as his recommendation not to use a bulldozer, do constitute mitigating circumstances.

### 3. *Mr Al Mahdi's individual circumstances*

94. In this section, the Chamber addresses all relevant circumstances that are not directly related to the crime committed or to Mr Al Mahdi's culpable conduct.

#### *i. Age, education and background, social and economic condition and conduct in detention of Mr Al Mahdi*

95. The Chamber has noted the statements of the two defence witnesses – both of whom have known Mr Al Mahdi for much of his life – who indicated that Mr Al Mahdi is an intelligent and very knowledgeable man<sup>156</sup> and that he

<sup>152</sup> See para. 38(ix) of the present Judgment.

<sup>153</sup> Statement by Mr Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4645, 4656-4657.

<sup>154</sup> Statement by Mr Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4645, 4660. See also, Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), para. 164.

<sup>155</sup> Defence Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red, paras. 150-155.

<sup>156</sup> MLI-DEF-0001-0001, 0001; MLI-DEF-0002-0001, 0001. See also para. 9 of the present Judgment.

assisted many of the poor communities of Timbuktu, including the community of the black Tuaregs, to which he did not belong.<sup>157</sup>

96. The Chamber does not consider that Mr Al Mahdi's age and economic background are of relevance. Furthermore, an absence of prior convictions is a fairly common feature among individuals convicted by international tribunals and shall not, contrary to Defence's submission,<sup>158</sup> be counted as a relevant mitigating circumstance. Additionally, the Chamber does not intend to give any weight, be it aggravating or mitigating, to the fact that Mr Al Mahdi was a scholar and expert in religious matters, irrespective of the evidence of his positive role in his community before the take-over of the city by Ansar Dine.<sup>159</sup>
97. Despite serious security concerns for his family, whom he has not seen since his transfer to the Court,<sup>160</sup> Mr Al Mahdi has been behaving in an irreproachable manner in detention and made a statement stating his appreciation of the manner in which he had been treated by the Court as a whole.<sup>161</sup> The Chamber considers that this factor is relevant, despite it being a legitimate expectation of any detainee, and attributes limited weight to it. Similarly, the Chamber accepts the Defence's arguments<sup>162</sup> that Mr Al Mahdi's admission of guilt and cooperation with the Prosecution, as discussed further below, show that he is likely to successfully reintegrate into society and accords a limited weight to them.

<sup>157</sup> MLI-DEF-0001-0001, 0003; MLI-DEF-0002-0001, 0003.

<sup>158</sup> Defence Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red, paras. 132 and 133.

<sup>159</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 48; Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 134 and 136; LRV Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-135-Conf, para. 38.

<sup>160</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), para. 49; Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 192-195.

<sup>161</sup> Annex II to Registry Observations, ICC-01/12-01/15-134-Conf-AnxII; [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 9, lines 19-23.

<sup>162</sup> Defence Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red, paras. 196-201.

ii. *Admission of guilt*

98. The Chamber notes that Mr Al Mahdi admitted his guilt. The Chamber further observes that Mr Al Mahdi took responsibility for his actions as early as the first day of his interviews with the Prosecution.<sup>163</sup> Subsequently, the parties reached an agreement sufficiently early in the proceedings, namely before the confirmation of charges,<sup>164</sup> to help substantially speed up the proceedings.
99. Additionally, not only did Mr Al Mahdi accept his responsibility but he also provided a detailed account of his actions,<sup>165</sup> facilitating the Chamber's establishment of the facts of the case.
100. The Chamber considers that an admission of guilt is undoubtedly a mitigating circumstance<sup>166</sup> and gives it substantial weight. In this regard, the Chamber notes that the admission was made early, fully and appears to be genuine, led by the real desire to take responsibility for the acts he committed and showing honest repentance. This admission of guilt undoubtedly contributed to the rapid resolution of this case, thus saving the Court's time and resources and relieving witnesses and victims of what can be a stressful burden of giving evidence in Court.<sup>167</sup> Moreover, this admission may also further peace and reconciliation in Northern Mali by alleviating the victims' moral suffering through acknowledgement of the significance of the destruction. Lastly, such an admission may have a deterrent effect on others tempted to commit similar acts in Mali and elsewhere. This said, the Chamber notes that this admission is

<sup>163</sup> P-182's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 118, line 19, to p. 119, line 4.

<sup>164</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), filed on 18 February 2016.

<sup>165</sup> Agreement, [ICC-01/12-01/15-78-Anx1-tENG-Red](#), pp. 10-34.

<sup>166</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 51-52; Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 180-184. The fact that an admission of guilt constitutes a mitigating circumstance is well-established in the case law of other international tribunals: see, for example, ICTY, Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Miodrag Jokić*, Sentencing Judgement, 18 March 2004, [IT-01/42/1-S](#), para. 96 ('*Jokić SJ*'); ICTY, Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Milan Babić*, Sentencing Judgement, 29 June 2004, [IT-03-72-S](#), paras. 73-75, 88-89.

<sup>167</sup> See also para. 28 of the present Judgment.



made against a backdrop of overwhelming evidence pointing to Mr Al Mahdi's guilt.

*iii. Cooperation*

101. In addition to admitting his guilt in full, Mr Al Mahdi has been cooperating with the Prosecution substantially, as detailed at length by witness P-182. The Chamber notes that this cooperation has been spontaneous and started as early as the first day of his interviews.<sup>168</sup> Mr Al Mahdi responded in an honest manner and his cooperation enabled the Prosecution to corroborate, clarify and specify information it already had in its possession.<sup>169</sup> During his interviews with the Prosecution, Mr Al Mahdi did not show any reluctance in touching upon his own acts.

102. The Chamber is also mindful of the fact that Mr Al Mahdi has cooperated despite being fully aware that his cooperation with the Prosecution increased the security profile of his family. Accordingly, the Chamber considers that Mr Al Mahdi's substantial cooperation with the Prosecution is an important factor going to the mitigation of the sentence to be imposed.<sup>170</sup>

*iv. Expression of remorse and empathy for victims*

103. The Chamber notes that, as early as the first day of trial, Mr Al Mahdi has expressed genuine remorse for his acts.<sup>171</sup> The Chamber notes that Mr Al Mahdi has expressed his 'deep regret and great pain'.<sup>172</sup> He insisted that the remorse he was feeling was for the damage caused to his family, his community in Timbuktu, his country and the international community. Not only did

<sup>168</sup> P-182's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 118, line 16, to p. 119, line 4.

<sup>169</sup> P-182's testimony, [ICC-01/12-01/15-T-4-CONF-ENG](#), p. 96, line 23, to p. 98, line 3; [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 16, line 15, to p. 17, line 16; See also [ICC-01/12-01/15-119-Conf](#), para. 3.

<sup>170</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 53-55, 67; Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#), paras. 185-191.

<sup>171</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 8, line 3, to p. 9, line 23, p. 43, line 19, to p. 44, line 2.

<sup>172</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 8, line 11.

Mr Al Mahdi categorically express his remorse, he made the solemn promise that 'this was the first and the last wrongful act [he] will ever commit'.<sup>173</sup> Mr Al Mahdi also indicated that he was willing to 'accept the judgment of the Chamber'.<sup>174</sup> Lastly, Mr Al Mahdi called on people not to become involved in the same acts that he was involved in 'because they are not going to lead to any good' for humanity.<sup>175</sup>

104. In addition to expressing remorse, and contrary to the submission of the LRV,<sup>176</sup> the Chamber does note that Mr Al Mahdi has expressed sentiments of empathy towards the victims of the crime he committed. The Chamber refers to the example of actions showing this empathy cited by the Defence, such as Mr Al Mahdi's offer to the imam of the Sidi Yahia Mosque to reimburse the cost of the door.<sup>177</sup>

105. The Chamber considers that such expression of remorse and empathy to the victims is a substantial factor going to the mitigation of the sentence.

### **C. Determination of the sentence**

106. The Prosecution submits that Mr Al Mahdi's sentence should be between nine and eleven years.<sup>178</sup> The Defence made extensive submissions on the adequate assessment of the gravity of the crime charged, the absence of aggravating circumstances and the importance of the mitigating circumstances in this

<sup>173</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 8, lines 20-21.

<sup>174</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 9, lines 7 and 8.

<sup>175</sup> [ICC-01/12-01/15-T-4-Red-ENG](#), p. 9, lines 16-18.

<sup>176</sup> LRV Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-135-Conf, para. 39; [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#), p. 29, line 20, to p. 31, line 22.

<sup>177</sup> Statement by Mr Al Mahdi, MLI-OTP-0033-4734, 4740-4734. See also, Defence Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red, paras. 171-179.

<sup>178</sup> Prosecution Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-139-Red](#), paras. 64-70.

case.<sup>179</sup> The LRV requests that the sentence handed down to Mr Al Mahdi be severe and exemplary.<sup>180</sup>

107. The Chamber stresses that sentencing an individual for crimes he committed is a unique exercise for which comparison with different cases can be of very limited relevance only, if any.<sup>181</sup> The Chamber considers the Defence's arguments about the sentences in other cases<sup>182</sup> to be irrelevant. These sentences were based on vastly different circumstances, including the applicable modes of liability and sources of law.<sup>183</sup>
108. As set out above, the Chamber must balance all the relevant factors, including any mitigating and aggravating circumstances, and consider the circumstances of both the convicted person and the crime. In order to sufficiently and adequately reflect the moral and economic harm<sup>184</sup> suffered by the victims of the present case and fulfil the objectives of sentencing, the Chamber must impose a sentence that is proportionate to the gravity of the crime and the individual circumstances and culpability of Mr Al Mahdi.<sup>185</sup>
109. The Chamber finds that the crime for which Mr Al Mahdi is being convicted is of significant gravity. This said, the Chamber has found no aggravating circumstances and five mitigating circumstances, namely: (i) Mr Al Mahdi's admission of guilt;<sup>186</sup> (ii) his cooperation with the Prosecution;<sup>187</sup>

<sup>179</sup> Defence Sentencing Observations, [ICC-01/12-01/15-141-Corr-Red](#); [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#), p. 35, line 4, to p. 70, line 10.

<sup>180</sup> LRV Sentencing Observations, ICC-01/12-01/15-135-Conf, paras. 45-50; [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#), p. 18, line 20, to p. 33, line 22.

<sup>181</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 92 and footnotes.

<sup>182</sup> [ICC-01/12-01/15-T-6-ENG](#), p. 52, line 22, to p. 60, line 3, referencing *Jokić* SJ, [IT-01/42/1-S](#); *Strugar* TJ, [IT-01-42-T](#).

<sup>183</sup> Article 24(1) of the ICTY Statute ('[...] In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of the former Yugoslavia').

<sup>184</sup> Report of Expert Witness P-104, MLI-OTP-0024-0537; Statement by P-114, MLI-OTP-0023-0344-R01, 0354, para. 54; P-431 testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 89, line 14, to p. 90, line 4; P-151 testimony, [ICC-01/12-01/15-T-5-Red-ENG](#), p. 59, line 13, to p. 61, line 9.

<sup>185</sup> Bemba Sentencing Decision, [ICC-01/05-01/08-3399](#), para. 91.

<sup>186</sup> See paras. 98-100 of the present Judgment.

<sup>187</sup> See paras. 101-102 of the present Judgment.

(iii) the remorse and the empathy he expressed for the victims;<sup>188</sup> (iv) his initial reluctance to commit the crime and the steps he took to limit the damage caused;<sup>189</sup> and (v), even if of limited importance, his good behaviour in detention despite his family situation.<sup>190</sup> Taking into account all these factors, the Chamber sentences Mr Al Mahdi to 9 years of imprisonment.

110. Lastly, noting that none of the parties or participants requests the imposition of a fine or order of forfeiture under Article 77(2) of the Statute and Rules 146 and 147 of the Rules, the Chamber finds that imprisonment is a sufficient penalty.

111. Pursuant to Article 78(2) of the Statute, Mr Al Mahdi is entitled to have deducted from his sentence the time he has spent in detention in accordance with an order of this Court, namely since his arrest pursuant to the warrant of arrest issued on 18 September 2015.<sup>191</sup>

---

<sup>188</sup> See paras. 103 and 104 of the present Judgment.

<sup>189</sup> See paras. 89, 91 and 93 of the present Judgment.

<sup>190</sup> See paras. 97 of the present Judgment.

<sup>191</sup> *Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI*, 18 September 2015, [ICC-01/12-01/15-1-Red](#) (redacted version notified on 28 September 2015).

**FOR THE FOREGOING REASONS, THE CHAMBER HEREBY**

**CONVICTS** Mr Al Mahdi of the war crime of attacking protected objects as a co-perpetrator under Articles 8(2)(e)(iv) and 25(3)(a) of the Statute;

**SENTENCES** Mr Al Mahdi to 9 years of imprisonment;

**ORDERS** the deduction of the time Mr Al Mahdi has spent in detention, pursuant to an order of this Court, from his sentence; and

**INFORMS** the parties and participants that reparations to victims pursuant to Article 75 of the Statute shall be addressed in due course.

Done in both English and French, the English version being authoritative.



Judge Raul C. Pangalangan, Presiding Judge



Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua



Judge Bertram Schmitt

Dated 27 September 2016

At The Hague, The Netherlands